

The background of the book cover is a photograph of a shattered glass window. A dark, thick branch or piece of wood is positioned diagonally across the center, with several spider webs spun over it and the broken glass. The glass is cracked and spiderwebbed, with some shards missing. Through the glass, a blurred view of a building and some greenery is visible.

Estallido social y una Nueva Constitución para Chile

MARIO GARCÉS



The background of the book cover is a photograph of a shattered glass window. A dark, thick branch or piece of wood is positioned diagonally across the center, with several spider webs spun over it and the broken glass. The glass is cracked and spiderwebbed, with some shards missing. Through the glass, a blurred view of a building and some greenery is visible.

Estallido social y una Nueva Constitución para Chile

MARIO GARCÉS



18
★
OCT

Serie 18 de octubre, a cargo de Silvia Aguilera

© **LOM ediciones**

Primera edición, marzo de 2020

Primera reimpresión, 2020

ISBN: 978-956-00-1245-6

eISBN: 9789560012814

RPI: 2020-a-304

Fotografías: Paulo Slachevsky

<https://www.flickr.com/photos/pauloslachevsky>

Edición, diseño y diagramación

LOM ediciones. Concha y Toro 23, Santiago

Teléfono: (56-2) 2860 68 00

lom@lom.cl | www.lom.cl

Tipografía: Karmina

Impreso en los talleres de LOM

Miguel de Atero 2888, Quinta Normal

Impreso en Santiago de Chile

Mario Garcés Durán

**Estallido social y una nueva
Constitución para Chile**



Introducción

¡Despertó, despertó, Chile despertó! fue la consigna que comenzaron a corear miles de manifestantes por las calles, avenidas y también por «las grandes alamedas»¹ de Chile, luego del estallido social del 18 de octubre de 2019. Nadie podía imaginar que algo así ocurriría en un Chile aparentemente tranquilo, estable y económicamente exitoso, según la prensa mundial. En los meses de noviembre y diciembre se celebrarían las reuniones de la APEC y de la COP 25 (Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico y la Cumbre Mundial por el Cambio Climático, respectivamente). Ambos eventos mundiales debieron ser cancelados.

Pues bien, este, nuestro país –que pocas semanas antes el presidente había definido como un verdadero «oasis» en el convulsionado mundo globalizado–, literalmente estalló, desafiando todas nuestras maneras tradicionales de entender la política, e incluso sorprendiéndonos acerca de nuestras propias capacidades para movilizarnos, poner en jaque al gobierno, y en pocas semanas instalar la demanda por una nueva Constitución Política del Estado.

Pero el impacto no solo fue nacional, sino que también en el mundo, al punto de que un diario inglés –The Guardian– llegó a sostener que si Chile había sido pionero en la instalación del modelo neoliberal, también podría ser el lugar de su fin, de su ocaso. Tal vez demasiado optimista la afirmación, pero que Chile cambió, que ya no es el mismo que hace solo algunas semanas, es una percepción ampliamente compartida por muchos chilenos.

El estallido social chileno, como las revoluciones o las revueltas populares acontecen, no se planifican como hacen hoy los tecnócratas en tantos ámbitos de la vida social, y especialmente económica. Por supuesto que después que ocurren se pueden entender mejor los síntomas que las precedían (o sus causas

en el sentido común) e incluso algunas de las formas que adoptan (por ejemplo, las performances o acciones de arte) o los actores más significativos (por ejemplo, los jóvenes, las mujeres y el feminismo).

Este libro surgió como una serie de artículos escritos al calor de las movilizaciones y con el ánimo de dejar registro de los acontecimientos, pero también de comprender el significado de tan importante proceso, que está cambiando el curso de la historia de Chile. Como indicaron espontáneamente los propios manifestantes, a propósito del alza de 30 pesos del boleto de Metro, que gatilló el estallido: «No son los 30 pesos, son 30 años». Es decir, lo que se puso en cuestión son los 30 años desde que se inició la transición a la democracia bajo la dirección de los partidos políticos y la ahora denominada «clase política» como una casta de privilegiados, separados de la vida común de los chilenos. Otros han dicho más: se está cerrando un ciclo de 47 años de exclusiones, de elitismo y de represión que se inició con la dictadura y que la democracia neoliberal de los noventa simplemente prolongó en el tiempo.

Como sea, Chile cambió, y luego de dos meses de movilizaciones, los ciudadanos se reúnen en plazas y locales comunitarios en asambleas y cabildos para debatir sobre la actual crisis política y los contenidos que debiera considerar una nueva Constitución Política del Estado, así como las medidas sociales más urgentes que reestablezcan un mínimo de justicia social. En los días que corren, estamos en medio de un inédito proceso constituyente, de reflexiones, debates y deliberaciones acerca de los «mínimos éticos» de una nueva moral ciudadana, de un nuevo modo de concebirnos como ciudadanos.

Nada de esto estaba prescrito, sino que ha sido el producto de la propia movilización, del salir juntos a la calle, del compartir, de la escucha recíproca y del pensar juntos de las personas que participan en diversos tipos de encuentros y asambleas. Por supuesto que en cada etapa los desafíos se multiplicaron o adquirieron nuevas dimensiones. En la etapa actual, luego que se produjo el Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución en el Parlamento, que tanto por su forma como en sus contenidos generó rechazos y desconfianzas en la ciudadanía,

la cual nunca fue consultada, el desafío mayor consiste en generar coordinaciones entre las Asambleas de Base y las futuras (algunas ya en camino) Asambleas Comunes y Provinciales, de tal modo de ir generando nuevas formas de «representación ciudadana».

Este paso de autoafirmación ciudadana y social es fundamental, ya que es el único camino que puede hacer posible que transitemos hacia una Asamblea Constituyente genuinamente democrática y legítima en su origen. Que no sea simplemente un nuevo pacto o «arreglo político» de los políticos profesionales, escindidos del sentir ciudadano y gran parte de ellos al servicio de los intereses hegemónicos del actual bloque en el poder.

Cuando este libro entre en circulación, seguramente nuevos sucesos estarán redefiniendo las formas de un conflicto que, hasta ahora, no tiene una clara resolución. Probablemente, la represión tomará nuevas formas, y tanto el gobierno como los políticos profesionales y los medios de comunicación seguirán buscando imprimir su propio sello al proceso constituyente. Sin embargo, ninguna salida «sin el pueblo» y sin mayorías ciudadanas será legítima ni perdurable.

Habida cuenta de estas razones, el presente libro no es neutral: está escrito desde la perspectiva ciudadana y de los movimientos sociales. En este sentido, pone el acento en el protagonismo y los aprendizajes de un pueblo en movimiento, en un medio académico e intelectual en que muchas veces el acento está puesto en el poder económico y político. No desconocemos esta perspectiva de análisis que, por supuesto, es relevante, pero buscamos evitar quedar atrapados en las dinámicas del poder establecido, teniendo en cuenta, además, que las mayores iniciativas democráticas y las mayores posibilidades del cambio provienen de los movimientos sociales y de los ciudadanos movilizables.

¹ [Expresión usada por Salvador Allende en su último discurso en La Moneda, el](#)

día del golpe militar del 11 de septiembre de 1973.: «Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor».

CAPÍTULO I

Octubre de 2019²

Los sucesos

Durante la semana del 14 al 18 de octubre, los estudiantes secundarios llamaron a evadir el pago de los boletos del Metro de Santiago, como una forma de protestar frente a una reciente alza de las tarifas de este importante medio de transporte. «Evadir, no pagar, otra forma de luchar», fue la consigna que cientos de estudiantes coreaban a la entrada de las estaciones de Metro desde el lunes 14 en adelante. El conflicto comenzó a escalar, contando con el apoyo tácito de gran parte de la población, cuando la tarifa del Metro alcanzaba, en horas punta, los 830 pesos chilenos.

Junto a las consignas, los estudiantes ingresaban a las estaciones del Metro y saltaban los torniquetes evadiendo el pago del boleto. El día jueves 17, mientras las estaciones eran custodiadas por carabineros de Fuerzas Especiales, el conflicto se radicalizó con ataques a las instalaciones de algunas estaciones, especialmente los torniquetes.

Pero no fue sino hasta el viernes 18 que el conflicto se expandió y amplificó con manifestaciones en estaciones de alta concurrencia de usuarios, lo que alteró el funcionamiento regular del Metro, que transporta diariamente a aproximadamente 2,8 millones de santiaguinos. Se empezaron a cerrar estaciones y se incrementó la represión en distintos lugares, alterando todo el sistema de transporte en una ciudad de 7 millones de habitantes. Cuando anochecía, la policía se vio aparentemente superada y el gobierno amenazaba a

los manifestantes con aplicarles la Ley de Seguridad Interior del Estado y no ofrecía ninguna salida al alza de tarifas. O sea, solo se criminalizaba la protesta, acusando a los manifestantes de «vándalos y criminales». A las 20:30 horas comenzaron a sonar las cacerolas en distintos barrios de Santiago y muchos manifestantes se congregaron a la entrada de varias estaciones del Metro, y con mayor presencia de jóvenes de los barrios populares –de nuestras poblaciones– vino el estallido de la rabia acumulada por unas mayorías que viven cotidianamente la precariedad social y la desigualdad estructural que el neoliberalismo configuró, materializó y naturalizó en la sociedad chilena, desde la dictadura de Pinochet hasta la fecha. Se iniciaron entonces ataques e incendios de algunas estaciones del Metro, más el saqueo de locales comerciales y supermercados. A estas alturas el Metro había suspendido todas sus operaciones en la ciudad y el gobierno se reunió de urgencia en La Moneda, para decretar, pasada la medianoche, el «estado de emergencia», que entregó la mantención del orden público a los militares.

La estrategia del gobierno fue desatinada y tardía en todas sus etapas. El día viernes, cuando el conflicto escalaba, solo ofreció represión, que estimuló aún más la movilización, la cual tomó formas inéditas: el ataque a las estaciones del Metro, que en pocas horas destruyó y provocó incendios de distinta magnitud – los daños suman varios millones de pesos– que dejaron al Metro prácticamente fuera de servicio (aún se evalúan los daños y no se sabe cuánto tiempo tomará la restitución del servicio).

El sábado 19, con estado de emergencia en ejercicio, las manifestaciones tomaron un doble giro: a) junto a la expresión pública del malestar mediante caceroleos y manifestaciones en plazas y grandes avenidas, se multiplicaron los saqueos a supermercados y farmacias; y b) la protesta se extendió a las provincias y se hizo nacional, de norte a sur del país, al menos desde Iquique hasta Punta Arenas, con mayor intensidad en Valparaíso y Concepción, las dos mayores ciudades después de Santiago.

En esta fase de la movilización, aun en desarrollo, el estado de emergencia fue

desafiado y desobedecido por la población, al punto de que la noche del sábado se impuso el «toque de queda» en Santiago, Valparaíso y Concepción. Tampoco el toque de queda alcanzó los efectos esperados y las manifestaciones públicas y saqueos continuaron.

Chile vivía entonces, el mayor «estallido social» desde que se recuperó la democracia, es decir en los últimos 30 años, un estallido que nadie podía imaginar o prever, aunque muchos admiten hoy que los síntomas existían y existen desde hace ya bastante tiempo. Como colofón de lo que hemos narrado, el presidente Piñera, en la sucesión de errores y fantasías de su gobierno, declaró, el domingo 20 de octubre al anochecer, que «estábamos en guerra».

Este estallido social, difícil de predecir en su magnitud, nos sorprende en un contexto francamente crítico desde el punto de vista social y político. Simplificando y de manera un poco esquemática: por una parte, desde el gobierno y el Estado, las instituciones viven su peor momento de credibilidad y legitimidad, producto no solo de la corrupción –de la que ya no se salvan ni las Iglesias– sino que además de su abismante distancia e indiferencia para con la sociedad y particularmente con el pueblo. Por otra parte, desde el punto de vista de las clases populares y sus luchas, esta movilización que conduce a un «estallido» se hace sin un convocante central, sin orgánicas conocidas (ni partidos, ni la CUT, ni coordinaciones territoriales), por lo que adquiere un «cierto» carácter espontáneo que hay que matizar, en el sentido de que los estudiantes secundarios y diversos movimientos sociales generaron sus propios procesos de organización y de expresión pública que preceden a este estallido: el movimiento mapuche, desde fines de los noventa; el movimiento estudiantil, secundario y universitario (mochilazo, en 2002; revolución pingüina en 2006; movimiento por la educación pública en 2011); el movimiento «No + AFP»³ desde 2016; el «mayo feminista» de 2018; los diversos movimientos socioambientalistas y de lucha por el «agua y los territorios»; las luchas y huelga de los profesores en 2018, etc. Todas estas luchas tienen un alto valor, pero carecen hasta ahora de instancias de coordinación y unificación suficientes.

No resulta fácil proponer una perspectiva analítica sistemática de lo que hemos vivido y estamos viviendo en estos días. En primer lugar, porque los sucesos aún están en desarrollo; en segundo lugar, porque la situación desafía nuestras categorías analíticas tradicionales y, en tercer lugar, por las cargas subjetivas que representa para muchos de nosotros –los que vivimos la dictadura– volver a ver a los militares en las calles. Pero aun así es necesario intentarlo.

1. Las razones del malestar

Existe cierto consenso en los medios, entre los políticos e intelectuales, y en el sentido común, que el problema es más que el alza de los boletos del Metro, lo que gatilló las movilizaciones. Esta fue «la gota que rebasó el vaso»; o, siguiendo una cierta tradición, los chilenos reaccionamos «cuando el agua nos llega el cuello».

El consenso se mueve en dos direcciones: a) La desigualdad estructural de la sociedad chilena, que se ha vuelto insoportable; b) La acumulación de abusos y alzas en los servicios públicos de luz y transporte, de salud (sobre todo, los altos precios de los medicamentos), de acceso a la vivienda, e incluso los altos costos de productos de primera necesidad. Se podrían sumar otras razones, como la precarización de los derechos sociales y el creciente endeudamiento de la población, especialmente la más pobre, con las tarjetas de crédito, que van desde la compra de comida hasta la ropa, el auto y los artículos electrónicos.

Finalmente, aunque la lista de agravios puede continuar, hay también una razón política: de acuerdo con el actual orden institucional, nada se puede cambiar, por más que los ciudadanos se movilicen y por miles, si no cuentan con la anuencia de la derecha o del gobierno de turno; por ejemplo, las pensiones de hambre y el sistema de AFP, los bajos salarios, el sistema de educación pública –que solo se pudo cambiar parcialmente– el sistema de salud pública, el acceso a la vivienda, etc.

En suma, las «largas sombras de la dictadura»⁴ implicaron que la política fuera monopolio de los poderes de facto, especialmente del gran empresariado y de los partidos políticos; que la promesa de la transición, de que «la alegría ya viene», solo alcanzó para algunos y excluyó a las grandes mayorías, que solo fueron vistas como «objeto» de políticas públicas –administradas por variados tecnócratas– y nunca como derecho a la participación y a la iniciativa del propio pueblo. En la larga transición se democratizó relativamente el acceso al poder del Estado, pero no la sociedad y su derecho a la participación. La Constitución de 1980, hecha aprobar por la dictadura, garantizaba eficazmente este derrotero.

Para decirlo de manera breve y concisa: la política es un asunto de los políticos y la población debe confiar en ellos –en su sensibilidad, su noción de «servicio público» y otros eufemismos– para que la sociedad progrese. Por lo demás, la economía, creciendo, es capaz por sí sola, de ofrecerles más trabajo, más recursos y, sobre todo, más consumo. En realidad, como lo indicó en alguna oportunidad un político e intelectual antaño de izquierda (de los que hay muchos), el mercado produce nuevas formas de participación y ciudadanía⁵. Mientras más consumidores tengamos, más efectiva es la democracia. Hágase «emprendedor», de usted depende y si duda, admita que «¡querer es poder!», como proclama la publicidad de un banco.

Podríamos seguir abundando en esta línea, pero nos parece que la mayoría del país lo sabe: vivimos en un país dual, un país para pobres, con un segmento que camina hacia la clase media, y un país para ricos, con su propio segmento de clases medias prósperas. Esta dualidad tiene expresiones visibles y manifiestas: salud para ricos y salud para pobres; educación para ricos y educación para pobres; barrios y viviendas para ricos y barrios y viviendas para pobres... La reproducción «moderna» del viejo e histórico clasismo chileno, que en esta coyuntura estalla, como muchas otras veces en la historia de Chile, en la cara de los poderosos.

2. El estallido como forma de expresión popular:

primero en contra del Metro, es decir, en contra del Estado; luego en contra del capital, es decir, los supermercados, farmacias, bancos y multitiendas

Como indicamos en la parte descriptiva de la crisis, al iniciar este artículo, todo comenzó con los estudiantes secundarios y su llamado a «evadir». No es la primera vez que los adolescentes chilenos se ponen a la vanguardia de las luchas sociales (en 2006 fue la «revolución pingüina, que precedió al gran movimiento estudiantil de 2011). Parece curioso, ¿por qué los estudiantes secundarios?

Una hipótesis posible y para bien de nuestra sociedad es que los adolescentes están pensando y lo hacen con mayor libertad que los adultos. Pero no solo piensan, sino que también «actúan» sin medir muchas veces sus consecuencias, y más todavía, su acción tiene efectos. Esta vez, cuando se les criticó que el alza de precios del Metro no afectaba a los estudiantes, respondieron con claridad meridiana, «sí, pero afecta a nuestras familias», y con esta respuesta lograron dos victorias: sumaron a sus madres y padres y le quitaron el piso al discurso de Piñera y la derecha, que siempre dice actuar en defensa de la familia.

¿Por qué el Metro? Esta es una pregunta que muchos se han hecho y que genera sentimientos ambivalentes, ya que Metro es un bien público y presta un gran servicio para el transporte. Pero, habría que agregar, el Metro simboliza el orden y el Estado. Dicho en lenguaje juvenil, representa «el sistema» que organiza la vida cotidiana de la ciudad. El ataque al Metro, si lo vemos en retrospectiva, efectivamente golpeó al sistema y desarticuló el orden de la ciudad. Como reza el refrán popular: «para hacer una tortilla hay que quebrar huevos», y esta vez se quebraron.

La noche del viernes 18, los ataques al Metro se extendieron y amplificaron cuando se sumaron los jóvenes de los barrios populares y las dos líneas más

afectadas fueron el eje La Florida y el eje poniente, Quinta Normal, Pudahuel y Maipú, dos ejes del Metro que recorren territorios del pueblo, en la manifiestamente escindida ciudad de Santiago.

La misma noche del viernes, pero con mayor amplitud, el sábado, se multiplicaron, a lo largo del país, los ataques a los supermercados. El grupo más afectado fue el de Walmart⁶, con sus emblemáticos Supermercados Líder (Walmart reconoció la noche del domingo 140 locales saqueados). Pues bien, ¿por qué este grupo fue el más afectado? La razón parece sencilla: es el que está cerca del pueblo, al que más se le debe, el que se visita cotidianamente. De las farmacias no se requiere mucho análisis: la especulación con los precios de los remedios la padece la gente mayor, y especialmente los jubilados, que ocupan en ellos la mayor parte de sus precarias pensiones.

Si el Metro representa al Estado, las redes de supermercados y farmacias representan al «mercado» y el «estallido social» creó la ocasión para «pasarles la cuenta».

3. Los distintos repertorios de acción, de las clases medias y de los más pobres

La mayor sorpresa para el gobierno y para todos los chilenos fue que, decretado el «estado de emergencia», las movilizaciones continuaron, es decir la medida que ponía militares en las calles no actuó como antídoto ni descomprimió la protesta, que tomó dos formas; caceroleo y ocupación de plazas (Plaza Italia en el centro y Plaza Ñuñoa en el sector oriente, entre las más visibles en Santiago), así como «marchas» en provincias y saqueos en los barrios de Santiago e importantes ciudades a lo largo del país.

Las manifestaciones fueron reporteadas por los medios de comunicación (radios

y TV) de modo casi ininterrumpido, con un doble discurso: protestar pacíficamente es un derecho, saquear es un delito. Evidentemente en este discurso de los medios está en juego la legitimidad de la protesta social, que revela la acción de dos grupos

sociales distintos, la de clase media⁷ y la de los sectores más pobres. A estos últimos se los criminaliza con una variedad de argumentos que van desde la condena a la violencia hasta la defensa de la democracia. Lo que no se dice es que la precariedad de la democracia es el resultado del predominio de los intereses de unos pocos, que han sido protagonistas de los mayores actos de corrupción en los últimos años y que, además, se protegen entre sí mediante juicios prolongados y sin destino o restituyendo algo de lo robado al Estado, o con condena a «clases de ética».

La convivencia de diversos repertorios de acción genera diferencias en la «opinión pública», fuertemente reforzada por los medios de comunicación, que condenan en coro «la violencia». Sin embargo, hay que admitir que si esto no hubiese ocurrido –los ataques a los símbolos del Estado y de mercado– no estaríamos en medio de un estallido y de una crisis que abre las posibilidades de recrear y reimaginar el futuro de la sociedad chilena.

Probablemente las manifestaciones continuarán en estos días, aunque hay que admitir que la represión y la presencia militar en las calles surtirán sus efectos, especialmente en relación a los saqueos, pero no es claro que disminuya la presión social y política, diversificándose los repertorios de acción (o, dicho de otro modo, las formas de lucha), mediante marchas, caceroleos, paralizaciones, pronunciamientos públicos, llamados a «protesta nacional», donde las acciones pacíficas convivirán con brotes de violencia social. No ignoramos que las diferencias en los repertorios de acción generan divisiones y conflictos, que pueden dificultar políticas de alianza y ser manejados por el gobierno y los medios de comunicación como una estrategia para legitimar la represión.

4. El protagonismo de los jóvenes

Un hecho que ha llamado la atención en las movilizaciones de los últimos días es la visible presencia juvenil. Desde los orígenes del movimiento, que comenzó con los estudiantes secundarios, y prácticamente en todas las movilizaciones en plazas, avenidas y también en los ataques a supermercados y las cadenas comerciales (farmacias, bancos, multitiendas, etc.), en todas partes «los jóvenes la llevan». Este es un fenómeno tal vez universal, sin embargo: en Chile adquiere una connotación especial; se trata de las nuevas generaciones que no vivieron la dictadura y que, de alguna manera, se puede sostener, no son portadoras del «miedo» que acompañó a sus madres, padres, abuelos, abuelas y generaciones que los preceden. Como se lee en los rayados y grafitis en las calles: «nos quitaron todo, hasta el miedo».

Pero se trata también de nuevas generaciones que están participando de cambios culturales relevantes y de diversa naturaleza: cambios en la estética, en la relación con sus cuerpos, en los modos de vestir, en la sexualidad, en las relaciones de pareja, en las nuevas formas de

inserción laboral y de sobrevivencia (con cada vez más extendidas estrategias de trabajo informal), y tal vez, lo más evidente, con un fuerte recurso a la comunicación digital, que suponen redes de información e intercambios –en tiempo presente– de información, convocatorias, análisis, juegos, distracción y una suerte de «opinión pública» entre pares.

De este modo, los jóvenes de hoy participan de una nueva subjetividad –más libertaria y más ciudadana– y con sus propios medios de comunicación e intercambio que los dispone a la movilización en tiempos mucho más veloces que en el pasado. Estamos, entonces, siendo testigos de nuevos actores y de nuevas temporalidades.

Entre los muchos sucesos de cierto impacto público, el día lunes 21, cientos de jóvenes de clase media marcharon por la Avenida Providencia y se manifestaron en el Apumanque y frente a la Escuela Militar, en Apoquindo con Vespucio, en

el corazón de los barrios de la burguesía chilena, un tipo de manifestación inimaginable en tiempos pasados.

5. El carácter inédito de este estallido: cuando «lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer».

Como indicamos más arriba, este «estallido social» nos sorprende en medio de un agotamiento de las formas políticas tradicionales que, en cierto grado, comprometen tanto al Estado y los grupos en el poder como a los grupos opositores y al pueblo, en un sentido más amplio.

Desde el punto de vista de los medios de comunicación, de gran protagonismo en estos días y haciendo de los periodistas una suerte de «intelectuales orgánicos» de la crisis, lo que se sostiene es que el diagnóstico ya es definitivo: la desigualdad y los abusos condujeron al «estallido social». El gobierno de Piñera, después de varios desvaríos, admite que ha tenido que escuchar «la voz de los ciudadanos». Desde la izquierda y de las redes sociales, se indica: «el pueblo se cansó».

En las primeras horas de las movilizaciones, avezados analistas se preguntaban ¿cómo esto no se pudo prever? ¿Dónde estaba el director de Inteligencia? ¿Y los asesores del gobierno? Incluso más, sin ninguna consideración sobre las causas de la movilización, las primeras declaraciones oficiales del ministro del Interior y de la ministra de Transporte simplemente condenaban a los violentistas y criminalizaban a quienes protestaban, recurriendo a las fórmulas habituales de la derecha frente a la desobediencia o la alteración el orden público.

La protesta y el estallido social sorprendieron a los grupos en el poder. No lo pudieron prever y tal vez, tampoco lo imaginaron. Esta situación es reveladora de la escisión y la distancia de la política para con la sociedad, del «desacoplamiento» de lo social y lo político, base sobre la cual se organizó la transición a la democracia, que excluyó y subordinó a los movimientos sociales

que lucharon en contra de la dictadura⁸. Este fue, de algún modo, el resultado de la adaptación de la centro-izquierda (demócrata cristianos, socialistas y pepedés⁹) a la Constitución de 1980 (heredada de la dictadura) y al modelo neoliberal. La primera adaptación –a la Constitución del 80– condujo a la «elitización» u «oligarquización» de la política; la segunda adaptación –al modelo neoliberal– condujo a la «mercantilización» de la vida social (y de paso a la colonización del Estado por los grandes grupos económicos nacionales y trasnacionales, con sus reiterados episodios de corrupción). En este contexto, tanto la derecha, por razones obvias, como la centro-izquierda se asimilaron a las lógicas neoliberales, mejoraron sus ingresos (especialmente los parlamentarios y altos funcionarios públicos) y vaciaron progresivamente la política de contenidos ideológicos, reduciéndola a un asunto de gestión en el Estado. Se hicieron todos hombres y mujeres funcionales y pragmáticos (as). Es contra esta forma de ejercicio de la política, desprestigiada en el tiempo y con débil legitimidad, que estalló en estos días la protesta social, exigiendo cambios profundos que atiendan las demandas ciudadanas y populares.

La situación en las fuerzas progresistas, de izquierda extraparlamentaria y de los sectores populares tampoco es tan sencilla. El pueblo chileno, en los últimos 50 años ha sido protagonista de dos grandes epopeyas: la Unidad Popular y las Protestas Nacionales en contra de la dictadura. Ambas terminaron en derrotas, con altos costos humanos, políticos y simbólicos. Su evaluación aún no termina de realizarse: se escabulle o se la niega, responsabilizando a los enemigos de la izquierda. Desde una perspectiva histórica, nos parece que el punto nodal no resuelto tiene que ver con problemas que aún nos acompañan y que el actual estallido social vuelve a poner sobre la mesa: las relaciones entre el Estado y la sociedad civil; el papel de los movimientos sociales y de los sujetos colectivos del cambio social.

El resultado de las adaptaciones de la centro-izquierda y el de las negaciones para evaluar las derrotas históricas nos han conducido al desarrollo de una izquierda difusa, diluida, que participa del sistema político, y a una izquierda anarquista (especialmente juvenil) y otra que vive del pasado, rememorando glorias y todo aquello que no fue. En rigor, uno de los mayores costos de las derrotas es la crisis de la institución «partido político de izquierda».

Probablemente, la mayor novedad en los últimos años ha sido la creación del Frente Amplio, que agrupó a diversos partidos, desde liberales hasta progresistas y de izquierda, algunos de reciente creación, y que alcanzaron una importante representación parlamentaria en las elecciones de 2017. Hasta ahora han tenido un desempeño mediocre en el parlamento y no han logrado constituirse en un referente político significativo. Su mayor debilidad, sugestivamente, radica en su débil relación con los sectores populares.

El cuadro no sería completo si no tuviéramos en cuenta el desarrollo de los tradicionales y los nuevos movimientos sociales. En el caso de los primeros (sindicalistas, campesinos y pobladores), se han debilitado como sujetos colectivos, mientras que los segundos –mapuche, feminismo, estudiantes y ambientalistas– han incrementado su presencia pública¹⁰. El mayor desafío en la actual coyuntura tiene que ver con el fortalecimiento de estas dinámicas de la sociedad civil, que en lugar de archipiélago debieran ser capaces de constituir un «continente», reforzando los intercambios y generando instancias de unidad social y política.

6. Las salidas políticas de corto y largo plazo

Resulta muy difícil prever las salidas a la actual crisis social y política por la que atraviesa la sociedad chilena. En muy corto plazo, si el domingo se había decretado «estado de emergencia» en Santiago, Valparaíso y Concepción, con «toque de queda incluido», hoy martes 22 de octubre el estado de emergencia se ha extendido tanto por el norte como por el sur del país. Santiago funciona a medias, con una sola línea de Metro y un insuficiente servicio de buses; los supermercados abren parcialmente sus puertas (con apoyo militar y de carabineros); la mayor parte de las farmacias y los bancos están cerrados, y los servicentros registran largas filas de automóviles que buscan abastecerse de gasolina. La ciudadanía se desplaza como puede y el toque de queda nos acompaña desde hace cuatro días.

Las movilizaciones en avenidas y plazas y los caceroleos se siguen extendiendo con inusitado vigor y entusiasmo a lo largo del país, incluidos los «barrios altos» de Santiago. Los manifestantes no solo reclaman respuestas a las demandas sociales (las mismas que han generado el malestar y el estallido social), sino que también el fin del «estado de emergencia» y el retiro de las fuerzas militares de las calles. Las víctimas fatales hasta hoy martes 22 de octubre suman 15 personas, 11 en los saqueos y 4 por acción directa de carabineros o militares, amén de malos tratos y mujeres abusadas, desnudadas en recintos policiales. Para mañana, miércoles 23, diversas organizaciones sociales han convocado a un paro nacional de actividades.

Las respuestas del gobierno se han centrado básicamente en el control de «orden público» y el presidente Piñera ha transitado desde el absurdo, al declarar «que estamos en guerra» el domingo 20, para moderarse el lunes 21, llamando a generar las condiciones para un nuevo «acuerdo social». Los políticos de derecha y de centro-izquierda amplían la noción y sostienen la necesidad de un nuevo «pacto social», que en rigor en Chile nunca ha existido. En el interín, el jefe de la Zona de Estado de Emergencia de Santiago, al día siguiente de la declaración de guerra de Piñera, indicó en televisión que «soy un hombre feliz y no estoy en guerra con nadie». Su declaración sorprendió a todo el mundo, y pareciera que no existe consenso en las Fuerzas Armadas sobre la conducta a seguir en la actual situación. Curiosamente, mientras el presidente tomaba la posición «militar», declarando «la guerra», el jefe militar tomaba una posición «política».

Más allá de las diferencias entre el jefe político y el jefe militar, la posición del gobierno se mueve entre la represión y la búsqueda de acuerdos con la clase política. Hoy, martes 22, Piñera invitó a los jefes de partidos a La Moneda, pero no concurrieron los dirigentes socialistas, comunistas ni los del Frente Amplio. El temor que circula entre militantes de la izquierda y los ciudadanos que protestan es que Piñera busque reproducir la «democracia de los acuerdos», una estrategia que organizó la transición a la democracia: producir acuerdos elitistas entre los partidos excluyendo a la sociedad civil y a los movimientos sociales.

Todo indica que el conflicto se va prolongar, generando o «un empate catastrófico» o una salida golpista (o autogolpe de Piñera), poco probable por ahora, o un fortalecimiento de la movilización y los movimientos sociales que debiera tener como horizonte un «proceso constituyente» (o Asamblea Constituyente en forma o reformas parciales a la Constitución), para lo cual es necesario una coordinación social y política suficiente que impida que la energía desatada termine disipándose.

Por ahora, nadie puede predecir cómo se conjura esta crisis. Lo único claro es que Chile ya no es el mismo que el de ayer, gracias a su pueblo movilizad.

Santiago, martes 22 de octubre de 2019

² Los contenidos de este capítulo fueron publicados como artículo en *Journal of Latin American Cultural Studies*, enero de 2020, disponible en línea en: <http://www.tandfonline.com/>>, Artículo DOI>.

³ AFP son las Administradoras de Fondos de Pensiones, basadas en la capitalización individual y en manos de empresas privadas, sin participación de los trabajadores.

⁴ Título de un libro que evalúa los 30 años de democracia: Julio Pinto (editor). *Las largas sombras de la dictadura*. Santiago, LOM ediciones 2019.

⁵ [José Joaquín Brunner, «Ciudadanía y participación. Notas para a discusión», Seminario de la Concertación de Partidos por la Democracia, Santiago, 22 de julio de 1997.](#)

⁶ [Un grupo transnacional reconocido por sus prácticas antisindicales que, cuando se instaló en Chile, buscó impedir la sindicalización de sus trabajadores, pero no les resultó.](#)

⁷ [La participación de las clases medias representa un duro revés para la derecha y el gobierno, que han pretendido validarse prioritariamente a través de estos sectores.](#)

⁸ [Este tema lo he trabajado en diversos artículos en los últimos años. Ver \[www.ongeco.cl\]\(http://www.ongeco.cl\).](#)

⁹ [Partido por la Democracia, fundado a fines de la dictadura.](#)

¹⁰ [Ver Revista Cal y Canto N° 6. En \[www.ongeco.cl\]\(http://www.ongeco.cl\).](#)

CAPÍTULO II

Represión, agenda social y la presión social que no cesa

La presión social sigue activa en Chile cuando ya se cumplen catorce días del estallido social que se inició el 18 de octubre pasado. La situación fue evolucionando vertiginosamente, tanto desde el punto de vista del gobierno como desde el pueblo movilizado, hasta culminar en «la mayor marcha de Chile» el viernes 25 de octubre con 1,2 millones de personas, según cifras oficiales, en torno a la Plaza Italia, en el centro de Santiago. Con posterioridad a este suceso, con nuevas formas –cabildos, asambleas y marchas– la presión social no cede.

Los medios de comunicación, en todos estos días de agitación y movilización, han invisibilizado la protesta en los barrios populares de Santiago. Sesgaron la información y concentraron sus miradas en las clases medias que se manifestaban «pacíficamente», mientras que del pueblo destacaron los saqueos y «la violencia»; es decir, lo que, a juicio de los medios, no se debe hacer y que solo merece ser condenado.

Los grandes medios, especialmente la televisión, en manos de grandes empresas, han actuado como aliados del gobierno y del discurso oficial, haciéndose parte de una definición política que no cuestiona el orden sistémico preestablecido, sino que favorece solo algunas reformas. La movilización popular, en este sentido, ha circulado por las redes sociales, que han jugado un papel relevante en esta crisis. Sin embargo, las redes que juegan un rol en la agitación, el testimonio directo de algunos protagonistas, las denuncias de violación a los DDHH, la noticia de último minuto, no tienen la capacidad de los grandes medios de producir análisis del conjunto o de las totalidades discursivas que acompañan a

los acontecimientos. Este papel lo cumplen parcialmente algunos medios alternativos (radios populares, sitios web), así como algunos intelectuales que producen columnas de opinión.

Las disputas interpretativas cobran, sin lugar a dudas, mucha importancia, habida cuenta del carácter interesado, maniqueo, manipulador, si no alienante de los medios. Tal vez, entre los muchos campos en disputa, uno de los más relevantes sea el papel que han jugado y están jugando los sectores populares en la actual crisis, o el «pueblo» que ha retornado al espacio público como «categoría política» luego de largos años de silencio. Al negar o manipular los medios de comunicación el protagonismo popular, lo excluyen de la deliberación y las definiciones políticas que hoy están en juego en la sociedad chilena. Por esta vía, los medios realizan una operación de salvataje de la clase política y de las instituciones del Estado, agudamente desprestigiadas y deslegitimadas en los últimos años.

Toda esta larga introducción es para decir que la protesta social que se desencadenó en Chile a partir del 18 de octubre ha sido un fenómeno masivo, de grandes proporciones, que tomó diversas formas en la mayor parte de los barrios de Santiago y también en las regiones. El pueblo «caceroleó», salió a sus calles y avenidas, se reunió en sus plazas, reactivó sus tradiciones comunitarias, organizó actividades para los niños, revivió «ollas populares», almuerzos colectivos, actos culturales, así como sus propias comunicaciones vía WhatsApp del vecindario o «poblacionales». La memoria de la lucha en contra de la dictadura afloró, irrumpió y reanimó el encuentro con los vecinos y los sentidos colectivos y comunitarios, visiblemente debilitados en la prolongada y nunca acabada transición a la democracia.

Es verdad que, al mismo tiempo que se generaba y masificaba este fenómeno popular en los barrios y «poblaciones» chilenas, tanto en Santiago como en las provincias, la movilización sostenida, especialmente por los jóvenes, que se concentraba en el centro de la ciudad o hacia las plazas de las comunas actuaba como un conjunto de «bengalas» que iluminaban y estimulaban a mantener viva

la protesta.

Los jóvenes, sin embargo, no constituyen un actor homogéneo. Se pueden reconocer «corrientes entre ellos», desde los grupos anarquistas (y en particular nuestros «capuchas» o encapuchados) hasta los que animan a los nuevos movimientos sociales (mapuche, feminismo, ambientalistas) y los nuevos partidos del Frente Amplio, pasando por los que recién se incorporan a las luchas sociales y políticas. Unos sueñan con la «revolución», otros imaginan una sociedad más justa basada en derechos sociales reconocidos y validados por el Estado, otros ven la posibilidad de sensibilizar a la sociedad sobre los nuevos temas y lenguajes que emergen de la sociedad civil (la crítica al patriarcado, al extractivismo, al racismo y la discriminación).

¿Cuál es el principal significado de esta enorme rebelión de los chilenos que nadie pudo prever en su forma y en su magnitud?

Una línea interpretativa relativamente consensual es que los chilenos se cansaron de las desigualdades y los abusos; otra, que corean los manifestantes en las marchas que refuerzan y enriquecen la línea anterior es la que indicó certeramente que «no fueron los 30 pesos, sino los 30 años»; es decir, simbólicamente se culpó a la transición dirigida y organizada por la clase política, escindida del pueblo (la Concertación y la Derecha, ambas promotoras de la «democracia de los acuerdos», que quiere decir algo así como: solo podemos cambiar aquello que produce consenso entre la centroizquierda y la centroderecha¹¹). Pero, no solo eso, los manifestantes que desfilan por plazas y avenidas chilenas, gritan como barra brava: «¡Despertó, despertó, Chile despertó!».

¿Cómo interpretar este sentir popular y ciudadano?

Se podría sostener que un ciclo de la historia social y política se cierra y que quienes busquen prolongarlo repitiendo las formas históricas de la transición a la democracia (leáse Concertación o Nueva Mayoría y Chile Vamos) lo harán como «farsa»¹² o como «comedia» Pero, seguidamente, habrá que afirmar que el horizonte de un cambio social hay que construirlo, ahora sí, democráticamente. ¿Esto significa el «derrumbe del modelo»? Difícil de prever, aunque hay indicios de que el «modelo neoliberal» debe ser modificado (y más allá de un capitalismo más humano o de «humanizar el capitalismo» como sostuvieron algunos intelectuales socialistas «renovados» –o «renegados»– a mediados de los años noventa).

Mi hipótesis es que lo que está en juego en el Chile de hoy –en medio del estallido social– es la apertura de un proceso de «reactivación democrática» (tal vez sería necesaria una genuina «revolución democrática», una posibilidad hasta cierto punto inédita o negada más de una vez en la historia de la sociedad chilena). La ciudadanía y el pueblo rechazan a la actual «clase política» y quieren ser escuchados y tomados en cuenta en la toma de decisiones en el Estado; quieren, de algún modo, tomar su destino en sus propias manos; quieren ser protagonistas de los cambios que se estiman necesarios de producir en el corto y en el mediano y largo plazo.

En este sentido, el horizonte más «revolucionario», más político y más transformador de la actual coyuntura de movilización social es la posibilidad de avanzar hacia una Asamblea Constituyente. Esto significa cambiar la Constitución heredada de la dictadura a través del ejercicio de la soberanía popular para definir colectivamente el tipo de país que queremos construir y las formas del poder, así como los procedimientos para un genuino ejercicio de la democracia. Por cierto, que no se puede afirmar que esto ocurrirá inevitablemente. Lo único que se puede afirmar es que ello es parte de las disputas políticas del tiempo venidero y que alcanzar estas metas dependerá de los grados de animación, movilización, organización y unidad del propio pueblo.

La estrategia del gobierno: represión y agenda social

Muchos analistas coinciden en que la estrategia del gobierno ha sido correr detrás de los acontecimientos. Otros dicen que el gobierno va dos o tres días atrasado. Si bien se puede admitir esta percepción, como veremos más en detalle, también hay que tener en cuenta que la estrategia del gobierno ha sido la más o menos clásica fórmula del «garrote y la zanahoria»; es decir, represión sostenida y apertura limitada hacia a los actores políticos tradicionales, para negociar, para hacer algunas concesiones y atender muy parcialmente algunas de las demandas populares.

Hasta el lunes 21 Piñera apostó a la línea dura, estado de sitio, toque de queda, ninguna concesión práctica y su famosa «declaración de guerra» al vandalismo, la delincuencia y a la supuesta «operación organizada y planificada» de los violentistas¹³. La declaración de guerra fue en cierto modo la «guinda de la torta» de la estrategia represiva, ya que inevitablemente se entendió que estaba en guerra con los ciudadanos movilizados. Dicho de otro modo, Piñera le declaró la guerra al pueblo de Chile. Las reacciones no se hicieron esperar y la primera y más simbólica fue la del general a cargo de la Zona en Estado de Emergencia de Santiago, quien declaró a la mañana siguiente que él «era un hombre feliz y que no estaba en guerra con nadie». Doble estupor de la ciudadanía: el jefe político del Estado, o sea el presidente de la República, les declaraba la guerra, y el jefe militar lo desmentía o se desmarcaba de la «guerra de Piñera».

Había que rectificar, de tal modo que en la siguiente aparición pública Piñera, pidió disculpas declaró que había escuchado a la ciudadanía y propuso una «agenda social», que partía por congelar el alza en las tarifas del Metro, y además una serie de medidas, como reajuste a las pensiones de los jubilados, un ingreso mínimo de 350 mil pesos, estabilizar precios de las tarifas eléctricas, mejoras en la salud y en los precios de los medicamentos, aumentos de impuestos a las rentas más altas, bajar la dieta parlamentarias y de los altos cargos en la administración pública.

Acto seguido Piñera convocó a los jefes de los partidos políticos para reunirse con él en La Moneda y acordar un rápido trámite de algunas de sus medidas en el Parlamento. Sin embargo, la agenda social de Piñera no encontró gran acogida en los sectores populares y de la clase media movilizada, al menos por cuatro razones.

La primera, y tal vez la más poderosa, es la baja credibilidad del gobierno y del parlamento en la mayoría de la

población. La segunda es que no se creó ningún mecanismo de consulta al propio pueblo y sus organizaciones sociales; la tercera, que las medidas más inmediatas no modifican de modo sustantivo los abusos tarifarios (que ya son muy altos y no basta con congelar las tarifas), los reajustes a las pensiones son muy poco significativos y otras de las medidas propuestas suponen largo trámite parlamentario; la cuarta razón, un poco más técnica y política, es que ninguna de las medidas propuestas afecta al modelo neoliberal y todos los mayores gastos correrán por cuenta del Estado, sin tocar a las empresas y al gran capital.

Durante toda la semana, el discurso del gobierno, del presidente y sus voceros, insistió en el valor de la «agenda social», y más todavía, en que se estaría generando un nuevo «pacto social» en Chile. Hasta ahora este discurso no termina de convencer a los grupos movilizados, de tal modo que el sábado 26 Piñera anunció que había solicitado la renuncia al conjunto de sus ministros.

Se tomó el presidente todo el fin de semana y recién el lunes 28 al mediodía presentó su nuevo gabinete, con algunos cambios en sus propios equipos de conducción política y económica. En la tarde del mismo día lunes, nuevas y masivas manifestaciones se desarrollaron en Santiago, que culminaron con un incendio en pleno centro de Santiago, cuando Carabineros bloqueó el paso de los manifestantes antes que llegaran a las inmediaciones de La Moneda. Entonces, la vocera del nuevo gabinete llamó a «condenar la violencia» y pidió «tiempo» para poner en práctica la nueva agenda social del gobierno. La televisión se sumó en coro a condenar la violencia.

En el intertanto, el estado de emergencia se mantenía y el toque de queda en Santiago siguió activo hasta ser levantado el día sábado 26. En rigor, durante la semana del 21 al 26 de octubre se fueron decretando estados de emergencia en diversas ciudades, de norte a sur del país, con toque de queda incluido. Es decir, mientras el gobierno difundía y defendía su «agenda social», paralelamente la represión se incrementaba y crecía el número de víctimas fatales, de heridos y detenidos, evidenciándose crueles y manifiestas violaciones a los derechos humanos. Por cierto, la represión tampoco favorece la escasa credibilidad del gobierno.

Graves violaciones a los derechos humanos

Para el domingo 27, el número de víctimas fatales alcanzaba a 19 personas. Por otra parte, el lunes 28, según informó la prensa, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INHD) consignaba que desde la noche del 17 de octubre se habían registrado:

1.132 personas heridas, entre ellas 68 niños, niñas y adolescentes, lo que se pudo establecer a través de la observación directa de los funcionarios del organismo en 50 hospitales a lo largo del país.

De las personas heridas por disparos, 571 fueron por arma de fuego y 24 por balines. Además, hay 127 personas con lesiones oculares. En ese punto, cuatro personas tuvieron pérdida o estallido

de su globo ocular.

El INDH informó, además, sobre la cantidad de querellas y recursos de amparo que han interpuesto: 101 acciones judiciales, dentro de las cuales 18 son querellas por torturas y tratos crueles con violencia sexual, mientras que 5 son querellas por homicidio.

El informe menciona que hay 231 víctimas por violencia a manos de agentes del Estado. En tanto, el número de personas detenidas hasta

este lunes se cifra en 3.243.

Uno de los casos que destacó el INDH es la denuncia de abuso sexual de un estudiante de Medicina en Pedro Aguirre Cerda. Esta persona «fue detenido por personal de Carabineros, quienes además de insultarle y golpearle reiteradamente por ser homosexual, le imputaron un delito de robo en lugar no habitado».

El día 30 de octubre, en medio de este contexto de movilizaciones sociales y de violaciones masivas a los derechos humanos, Piñera anunció al mundo la decisión de suspender las reuniones de la APEC y de la COP 25 en Santiago. Esta última abordaría el cambio climático y el creciente deterioro ambiental nivel global. Algunos analistas han sostenido que Piñera necesita sacar a Chile de la atención mundial no solo por los fracasos visibles de las fórmulas neoliberales, en las que suponía un país modelo y ejemplar, sino por las dificultades que enfrentaría para justificar ante el mundo la violación de los derechos humanos.

Las graves violaciones a los derechos humanos se han ido revelando paulatinamente y cada día que pasa sube el número de víctimas y detenidos (de hecho, el número de detenidos que consigna el INDH al viernes 31 de octubre ya supera las cuatro mil personas) y se empiezan a conocer casos de «represión selectiva» (personas que son detenidas en sus lugares de residencia). Es decir, muy probablemente, a la represión masiva, en el contexto de manifestaciones públicas, siga una fase selectiva, como ocurrió más de una vez en la larga

dictadura de Pinochet. En realidad, aunque suene fuerte decirlo de este modo, el gobierno de Piñera no solo devolvió a la memoria de los chilenos la experiencia de la dictadura, sino que, de modo fáctico, nos retrotrajo a un tiempo de represiones que pensábamos superado. Pero, más todavía, algunos analistas admiten ciertas «innovaciones» en la represión que se asemejan a la de otros países, como los disparos al cuerpo y al rostro de los manifestantes. Al día de hoy se han denunciado 140 casos de daños oculares.

Los sectores movilizados: la presión social no cesa

El principal actor del estallido social de octubre ha sido el pueblo chileno. La afirmación, sostenible, por cierto, es un poco general, por lo que resulta necesario distinguir actores, repertorios de acción, territorios, sectores sociales implicados, así como también fases que han ido marcando ciertas tonalidades de la movilización.

Al menos cuatro fases se pueden identificar con alguna claridad:

La de los estudiantes secundarios, del 14 al 18 de octubre, que llamaron a evadir el pago de boletos e ingresaron a las estaciones del Metro. La protesta en las estaciones del Metro se radicalizó la tarde del 17 con la destrucción de torniquetes, y el 18 obligó al cierre de estaciones que desarticulaban en pocas horas todo el sistema de transporte público de Santiago. Los actores fundamentales en esta etapa fueron los estudiantes.

La del estallido social, del viernes 18 en la noche hasta el lunes 21. En esta fase, se sucedieron la quema de estaciones del Metro, los saqueos a supermercados y farmacias y las marchas en distintas comunas de Santiago. Los actores y los repertorios de acción se multiplicaron. A los estudiantes se sumaron los sectores

populares

—especialmente jóvenes— y la policía fue superada por los manifestantes. El Metro suspendió sus operaciones y la quema de estaciones impactó profundamente en la ciudadanía, ya sea para lamentar los sucesos como para estimular nuevas movilizaciones, especialmente los saqueos a supermercados y farmacias. Los medios de comunicación y la sociedad, en un sentido más amplio, reconocieron que se había producido un estallido social que nadie podía prever. Saltaron todas las alarmas.

La de la expansión de la protesta a las provincias, prácticamente desde el domingo 20 hasta el 25 de octubre, con una intensidad creciente en Valparaíso y Concepción, pero que como un reguero de pólvora se fue instalando en la mayoría de las grandes ciudades chilenas. Paralelamente, en Santiago, declinaron los saqueos, con militares en las calles, pero se mantuvieron las manifestaciones en plazas (Plaza Italia y Plaza Ñuñoa especialmente), avenidas del barrio alto de la capital (donde residen las clases medias acomodadas) y un gran número de «poblaciones» y barrios populares de Santiago. Esta fase culminó con la convocatoria a «la marcha más grande de Chile», que congregó —el viernes 25— en torno a la Plaza Italia, según cifras oficiales, a 1,2 millones de personas. Muy probablemente la marcha congregó a un millón y medio o más de santiaguinos. Diversos personeros de gobierno, incluido el presidente Piñera, buscaron apropiarse retóricamente de la marcha del viernes 25, valorando su carácter pacífico y transversal («ni de izquierda ni de derecha», como afirmaron algunos), insistiendo que las autoridades y los políticos habían escuchado el mensaje de la ciudadanía.

Con posterioridad a la «marcha más grande de Chile» las movilizaciones han continuado, con diversa intensidad, tanto en Santiago como en las provincias. Los jóvenes siguen siendo el actor más permanentemente activo, pero durante la semana del 27 de octubre al viernes 1 de noviembre, los gremios de la salud, la educación y la administración pública han convocado y protagonizado sus propias marchas por el centro de Santiago. La CUT y la Central Clasista de los Trabajadores también se movilizan, pero hay que, admitir que con una tasa de sindicalización que en Chile no supera el 12% de la fuerza de trabajo, sus

capacidades de acción son débiles, amén de las disputas partidarias que el sindicalismo no supera fácilmente.

La Plaza Italia sigue siendo el lugar de encuentro y del inicio de marchas que buscan dirigirse hasta La Moneda, por la Avenida Alameda. De este modo, a pesar del inevitable desgaste que implica mantener vivas las movilizaciones por varios días, las iniciativas del gobierno por volver a «la normalidad», la presión social no cesa ni cede; la ciudad funciona a media marcha, con el Metro parcialmente restituido y los supermercados y una variedad de negocios (cafés, restaurantes, etc.) atendiendo en horarios restringidos.

Pero, con todo, la mayor novedad de esta fase es que se comienzan a multiplicar las asambleas y «cabildos»; en algunos casos, sectoriales como los trabajadores de la cultura o la hinchada de Colo-Colo, pero más masivamente en distintos barrios populares y de clase media de Santiago y de las regiones. Se inicia, de este modo, un vasto proceso de deliberación social y político en que se comparten diagnósticos, se identifican demandas, se proponen cambios y se va afianzando la propuesta de una Asamblea Constituyente.

Las zonas oscuras o semioscuras del estallido social

En todas las fases de la movilización, hay «zonas oscuras» o semioscuras. La más oscura es la que insinúa —en las redes sociales y en mini-videos en internet— la participación de agentes o funcionarios vinculados al Estado en saqueos, barricadas e incendios atribuidos luego a los manifestantes «violentistas». También se han generado dudas acerca de por qué carabineros se replegó o abandonó ciertas zonas de conflicto (por ejemplo, la Estación del Metro de Maipú en la tarde de día 18 de octubre). ¿Fue superado realmente por los manifestantes? ¿O hay otras razones? Una hipótesis plausible es que «se dejó hacer» para justificar el estado de emergencia y la «guerra» que pronto declararía Piñera.

Otra zona semioscura y poco trabajada, aunque fácil de imaginar, es el papel que jugaron los «narcos» en el momento más álgido de los saqueos y ataques a locales comerciales. Todo indica que sus «soldados» –como llaman los narcos a sus jóvenes que realizan acciones operativas– se movilizaron activamente.

No obstante estas zonas semioscuras, tampoco se puede afirmar que los saqueos fueron obra solo de los «violentistas», y menos todavía atribuirlos al «lumpen» y la anomia (dos conceptos a los que recurren muchos analistas, evitando comprender las dinámicas populares). Los saqueos, en varias etapas, fueron una forma en que diversos grupos populares «le pasaron la cuenta» a la desigualdad, el creciente endeudamiento y la promoción del consumo estimulado por las lógicas neoliberales que recorren a la sociedad chilena.

También existen esas zonas de manipulación manifiesta, como aquellas que han atribuido el estallido a fuerzas «venezolanas y cubanas», altamente calificadas para realizar acciones de boicot y terrorismo, financiadas por Maduro (y el narcotráfico, agregan otros) que habrían ingresado al país para provocar la crisis. El diario La Tercera que se hizo eco de estas versiones, tuvo que desmentirlas prontamente. Esta es la versión más extrema, pero hay otras que matizan el mismo argumento, indicando, como lo ha hecho el propio Piñera, que este estallido fue el producto de la acción previamente organizada y planificada de «fuerzas violentistas» que no se definen y que quedan al arbitrio de la imaginación de quienes le dan algún crédito. No faltan ciudadanos bien intencionados que necesitan de alguna explicación rápida y fácil que les indique una «causa» material del estallido.

Un estallido social es un acto multifacético de alteración del orden preestablecido que congrega a diversos actores, con sus propias dinámicas, que se sabe de antemano que tiene principio y fin, y que en muchos casos representa una «oportunidad» para hacer justicia por vía práctica y que incluso se puede vivir como un momento de fiesta y de carnaval.

Definir un camino y un horizonte común

Como indicamos en un artículo anterior¹⁴ el actual estallido social en Chile se verifica en medio de la mayor crisis política, en el sentido de la brecha de la política tradicional y la sociedad (su desprestigio, pérdida de legitimidad e irrelevancia como producto de su vaciamiento político e ideológico). Por otra parte, la movilización social –que recrea la política dotándola de nuevos contenidos– se produce en ausencia de un convocante central, de orgánicas tradicionales o de coordinaciones territoriales. Esta inédita situación coloca diversos desafíos para todos los actores implicados en el conflicto.

En este contexto, para los sectores movilizados, uno de sus principales desafíos ha sido alcanzar mayores niveles de coordinación y unidad, pero también concordar el camino y el destino de la movilización. Este problema que, en otras etapas de la historia, definían los partidos políticos, especialmente de la izquierda, esta vez se ha ido concordando y clarificando por vía práctica, ya sea reconociendo el efecto de las propias acciones, como por el desarrollo de diversas formas de asociación y de conversaciones, intercambios y debates por la base y la emergencia de coordinaciones de los gremios y movimientos sociales (los profesores, la ANEF, la CUT, No + AFP, 8 M, y otros). En términos generales, se podría sostener que se han ido constituyendo tres acuerdos fundamentales:

La presión y la movilización social se debe sostener: Como indican diversos grupos y personas, «sin movilización no hay cambios».

El movimiento se debe fortalecer desde las bases, a través de encuentros, asambleas o cabildos. Distintas denominaciones para un conjunto de propósitos comunes: comprender el momento histórico que vivimos;

articular las demandas; definir un horizonte político compartido.

La necesidad de una Asamblea Constituyente. Este es el mayor horizonte de cambios, que es por cierto resistido por la derecha y sectores de centro-izquierda, amén de que no es fácil de concretar. La mayor novedad, en los últimos días, es que se ha propuesto la necesidad de convocar a un Plebiscito que invite a la ciudadanía a pronunciarse sobre la necesidad de una nueva Constitución como salida a la actual crisis social y política. La ventaja de esta propuesta es que apela a un mecanismo democrático, de manera que sea el conjunto de la sociedad la que se pronuncie. Para eso tiene que vencer escollos; el más importante es que se requiere reformar la Constitución y una ley que habilite la medida.

Santiago, Sábado 2 de noviembre de 2019

¹¹ Centro-izquierda y centro-derecha es el modo en que se autodefinen los partidos del orden en Chile. La centro-izquierda, como alianza de la Democracia Cristiana (históricamente centrista) y Socialistas y PPD (la vieja izquierda aggiornada al neoliberalismo); la centro-derecha, como alianza de la UDI (pinochetista y conservadora) y Renovación Nacional (con algunas orientaciones liberales). Todos orientados al centro, como una estrategia electoral orientada a captar a las clases medias y como un ejercicio de la política, respetuosa de la unidad nacional, la gradualidad en los cambios y la legalidad e institucionalidad vigente.

¹² Aludo a la famosa metáfora de Marx en El Dieciocho de Brumario de Luis Bonaparte: «Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa»

¹³ La noche del 20 de octubre, desde La Moneda, declaró: «Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite». Canal 13, on line.

¹⁴ Ver «Estallido social en el Chile neoliberal», en: www.ongeco.cl; www.lom.cl.

CAPÍTULO III

Notas a tres semanas del estallido, en los días que se indican

Chile en la encrucijada

(jueves 7 de noviembre)

Se cumplen 20 días desde el estallido social del 19 de octubre pasado, generándose, en la actualidad, un verdadero impasse entre la ciudadanía movilizada y el gobierno de Sebastián Piñera.

Sostuvimos, en un primer artículo el 22 de octubre¹⁵, que la situación generada por el estallido social chileno desafiaba nuestras categorías de análisis tradicionales, lo que nos inhibe, hasta ahora, de sugerir pronósticos de cómo se supera la actual crisis por la que atraviesa la sociedad chilena.

Algunos de los problemas prácticos y conceptuales que nos interpelaban e interpelan hasta hoy, son los siguientes.

La sociedad ha sido profundamente transformada en los últimos 50 años, tanto en su economía y su estructura de clases como en el Estado y los actores sociales y políticos. Esto produce una visible distancia entre la política tradicional, la institucionalidad y la sociedad. La noción de «clase política» como una suerte de

casta o estamento es muy expresivo de estas distancias.

Desde el punto de vista de la clase popular y de los movimientos sociales se han debilitado los movimientos históricos (obrero, campesino y de pobladores) y han emergido nuevos movimientos sociales que han jugado papeles relevantes en la actual coyuntura: NO + AFP, profesores, feministas, mapuche, movimientos por el agua y los territorios, ambientalistas, así como un vigoroso y transversal «movimiento juvenil».

Hasta ahora, los actores más movilizados han sido los jóvenes, en registros muy diversos: los secundarios que iniciaron la movilización en las estaciones del Metro; «colectivos», en especial anarquistas, «capuchas» organizados y espontáneos, estudiantes universitarios, artistas, jóvenes pobladores, «barras bravas», profesionales y militantes de diversos partidos de la izquierda.

La movilización fue comprometiendo crecientemente a los sectores medios y populares en cabildos muy diversos (desde actores culturales, vecinales, hasta el Club Deportivo Colo-Colo) y asambleas territoriales en un gran número de poblaciones en Santiago y provincias. Se inició de este modo un lento proceso de reagrupamiento y repolitización (o nueva politización) desde las bases de la sociedad.

Los repertorios de acción han sido especialmente «caceroleos», marchas, cabildos, asambleas territoriales, actos culturales, concentraciones; así como también, en un registro ambiguo respecto de los actores implicados, saqueos e incendios de supermercados, cadenas de farmacias y algunas tiendas y multitiendas; ataques a los frontis de bancos, telefónicas, oficinas de AFP, hoteles de lujo, etc. La ambigüedad en relación al recurso de la violencia nos enfrenta a serios problemas para el análisis. La cuestión de la «violencia» ha sido uno de los principales argumentos en contra de las manifestaciones ciudadanas tanto de los medios de comunicación como del gobierno y los desorientados políticos chilenos.

Lo que habitualmente se escabulle es un dato histórico y estructural: el primer y más radical actor de la violencia en Chile es el Estado a través de sus agentes, especialmente carabineros (bajo estados de excepción, los militares), que dotados de capacidades y medios desproporcionados y letales ejerce daño directo sobre los cuerpos de los ciudadanos. La violencia que ejerce el Estado es siempre asimétrica en contra de ciudadanos pacíficos sin medios para defenderse, y cuando lo hacen, los «enfrentamientos» son piedras, barricadas, y a veces algunas molotov, en contra de carros blindados y carabineros provistos de bastones, bombas lacrimógenas y escopetas con perdigones y balines, además de sus armas de servicio. El resultado es el pueblo masacrado –24 muertos en tres semanas–, centenares de heridos y miles de detenidos. El gobierno y las autoridades policiales juegan entonces al «empate» y muestran datos de un alto número de carabineros «lesionados». Por otra parte, la distinción entre protestas pacíficas y violentas es también engañosa, ya que, en muchos casos, los propios agentes del Estado se encargan de transformar –por medio de la represión y el uso abusivo de la fuerza– las protestas pacíficas en situaciones de violencia. Una segunda perspectiva de análisis de la violencia, un tanto más compleja, se relaciona con el ataque a supermercados, farmacias y otros locales comerciales, que ha comprometido a diversos actores en las distintas fases de la movilización: la espontánea de los primeros días; la de pequeños grupos de jóvenes militantes; la de los narcos y sus soldados, que vieron una oportunidad para actuar; pero la más compleja es la de dudosa procedencia que muestran algunos videos con la policía que «dejó hacer» o que simplemente estuvo ausente. Esta última pareciera ser parte de la estrategia de «guerra» del gobierno, que busca crear un clima de terror para asegurar la gobernabilidad de un gobierno sin recursos políticos para hacer frente a la rebelión ciudadana. Se trata, de este modo, de otorgar «legitimidad» a la represión, que constituye uno de los pilares en que se sostiene al actual orden estatal heredado de la dictadura.

Estos nuevos actores y dinámicas ciudadanas han puesto en jaque al gobierno de Sebastián Piñera, al persistir en la movilización, que por más de tres semanas desarticuló el sistema de transporte, el comercio, los servicios públicos, el «orden» de las ciudades y la vida cotidiana de un alto número de chilenos. Carecemos de registro histórico de una movilización popular¹⁶ sostenida por

tanto días, de manera ininterrumpida y con los efectos indicados.

La principal respuesta del Estado, como hemos adelantado a propósito de la violencia, ha sido la represión, que adquiere nuevas formas, especialmente desde carabineros, que detiene, golpea, gasea, lanza agua contaminada y dispara balines y perdigones a corta distancia y al cuerpo de los manifestantes. No solo los detenidos y heridos suman miles, sino que los mutilados superan los 200, con pérdida o daño grave a sus ojos y la visión. La policía chilena ingresa una vez más a la historia mundial por sus prácticas más crueles y aberrantes.

¿Se prefigura una «dualidad de poderes»? Tal vez, en algunos sentidos, pero no lo suficiente como para producir una definición del conflicto en el corto plazo, en la medida que el pueblo vive su propio proceso de rearticulación, que toma más tiempo que el que facilita la coyuntura. No hay homogeneidad ni correspondencia mecánica entre el «tiempo político» y el «tiempo social». Se trata de temporalidades diferentes que es necesario tener en cuenta, so pena de errar en el análisis.

La situación se hace más compleja.

¿Empate catastrófico de fuerzas?

(miércoles 13 de noviembre)

La presión social no cesa: el fin de semana del 9 y 10 se multiplicaron los cabildos y las asambleas sectoriales y territoriales.

El cuadro político de los partidos en el poder se reordena. La mayoría se inclina por el cambio de la Constitución, aunque difieren en la forma en que ésta deba realizarse. Desde el Gobierno se propone «Congreso Constituyente», es decir, que el mismo Congreso Nacional sea el encargado de redactar una nueva Constitución. Desde la Nueva Mayoría y el Frente Amplio se plantea la necesidad de un plebiscito y Asamblea Constituyente.

La situación se modifica, desde el punto de vista social y político, con la convocatoria al Paro Nacional para el martes 12 de noviembre, en que se incrementó la represión y la violencia social de los grupos movilizados. Pero, además, el paro conlleva el ingreso –algo tardío– de sectores de obreros organizados y trabajadores de diversos rubros, tanto públicos como privados.

La represión corre por cuenta de Carabineros y la PDI con uso desproporcionado de la fuerza y la violación sistemática de los derechos humanos con grave efecto sobre los manifestantes, que –como ya indicamos– toma expresión en el estallido de los globos oculares y pérdida de la visión (¡mutilar y dejar marcas imborrables!), lo que provoca amplio rechazo en la sociedad civil. En realidad, vivimos nuevas formas de «terrorismo de Estado» en plena democracia.

La violencia de los manifestantes, habitualmente como respuesta a la represión, pero también con cierta autonomía, se dirige hacia los símbolos del poder, tanto del Estado como del capital. El día martes 12 se atacó un cuartel militar en San Antonio (Tejas Verdes, donde Manuel Contreras inició la construcción de la DINA, la terrorífica policía secreta de Pinochet) y la gobernación de Concepción; en Santiago se quemó un hotel y parcialmente una iglesia; en Viña del Mar se atacó el Hotel O'Higgins, símbolo de la farándula nacional de todos los tiempos.

El gobierno intenta volver a decretar «estado de emergencia», pero todo indica

que no encuentra el apoyo de las Fuerzas Armadas. El bloque en el poder está fisurado, de tal modo que su única salida por ahora es «política», es decir, medidas sociales relevantes y convocatoria a la Asamblea Constituyente, probablemente mediante un plebiscito que zanje la «forma» y los plazos en que ésta deba realizarse (el parlamento actual o futuro, fórmula mixta, o definitivamente, una Asamblea Constituyente ciudadana). También se podría plantear la eventualidad de una dimisión de Piñera y gobierno de transición, con programa social de emergencia y Asamblea Constituyente. Y en el peor de los casos, golpe de Estado (o autogolpe) con un sector del Ejército y la Marina¹⁷.

La clase política prepara una «salida política»

(jueves 14 de noviembre)

Luego del paro del día 12 de noviembre, de la imposibilidad del gobierno de volver a decretar el «estado de emergencia» como producto de la negativa de las Fuerzas Armadas (especialmente el Ejército), Piñera interviene en la televisión para reintegrar a carabineros y miembros de la PDI (su «guerra» continúa y necesita de refuerzos), llamar a un acuerdo por la paz e insistir en algunas medidas sociales. En el intertanto, los alcaldes alteran el guion proponiendo una consulta (un cuasi plebiscito) para el 7 de diciembre, lo que es mucho más que la difusa propuesta del ministro del Interior de llamar a un «Congreso Constituyente». La idea de una Constituyente comienza a ganar cada día más adeptos, incluida la clase política. Y en las calles la movilización no cesa; tampoco los «saqueos». Comienzan a sonar las alarmas, tanto que Piñera se reúne con los ex presidentes de Chile.

En rigor, lo que se percibe la noche del martes 12, es que el «tiempo político» del gobierno se agota. ¿Puede soportar el gobierno más días sin reestablecer el «orden público»? ¿Piñera debe renunciar? ¿La Asamblea Constituyente se ha

impuesto? ¿Es necesario un gobierno de transición que llame a Plebiscito, Constituyente, y una enérgica agenda social? Interesante perspectiva la que se insinúa, pero, que se modifica velozmente –no sabemos aún con cuanta eficacia– el miércoles 13, cuando el conjunto de la clase política se autoconvoca en el Congreso para acordar una salida: algo parecido a una Asamblea Constituyente (el cambio a la Constitución ya es consensual, de derecha a izquierda); sin embargo, hay que acordar «la forma» y los límites. Comienzan las operaciones políticas y lingüísticas, y pareciera que la más novedosa es la idea de una «Convención», una suerte de Asamblea «mixta», compuesta por parlamentarios y ciudadanos elegidos para tales fines. La clase política chilena pareciera demostrar, una vez más, su inagotable capacidad de autorreconstrucción y autorreproducción en el Estado. Sin embargo, está por verse, si logra revertir la crisis de representación y su visible desprestigio. ¿La izquierda institucional se prestará para resolver la crisis «en las alturas»? ¿Es que, como nos han dicho más de una vez, no había otra alternativa? O es que tenían razón los jóvenes de la ACES (Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios), que indicaron, al retirarse de «Unidad Social», que la movilización del pueblo en las calles no se negocia.

¿Y el pueblo puede influir aún en una salida política?

Hemos sostenido, desde que se inició el estallido social chileno, que éste reunía características peculiares: carecía de un convocante central, de orgánicas o coordinaciones territoriales como en otras etapas de nuestra historia. Indicamos, así mismo, que ello implicaba un enorme desafío político que suponía rápidos aprendizajes y alcanzar alguna forma de unidad social y política.

Tal vez todavía es muy temprano para hacer un balance de los logros y límites de la movilización popular, que desafía nuestras categorías y conceptos tradicionales para comprender la política chilena de hoy. Con todo, se pueden hacer algunas indicaciones:

1. Sin convocante central que señalara el rumbo y las consignas, de modo práctico se fue imponiendo un camino: movilización, asambleas y cabildos por la base, y Asamblea Constituyente. Sin lugar a dudas este es un gran logro en una «cultura política» como la chilena, acostumbrada a la «conducción partidaria» o a los grandes liderazgos. Es un avance, pero no exime al pueblo de la necesidad de construir nuevas formas de coordinación (o de conducción colectiva), así como de liderazgos (también colectivos) que vayan fortaleciendo la unidad social y política del pueblo.

Un segundo gran logro del movimiento es que se generó un extendido consenso sobre la necesidad de un cambio constitucional. Esta no era la voluntad de la clase política chilena hasta antes del estallido social. Hoy forma parte de las conversaciones de la mayoría de los chilenos.

Los Cabildos y Asambleas territoriales han dado inicio a un «proceso constituyente» que ha ido produciendo acuerdos sobre los cambios irrenunciables que se requiere poner en marcha: fin de las AFP y mejora de las pensiones, recuperación de los «bienes comunes», Estado plurinacional, derechos sociales en salud, educación y vivienda, cambio de la legislación laboral, etc.

La movilización, en todas sus etapas, ha hecho evidente no solo las contradicciones (la desigualdad y el abuso), sino la distancia, el descrédito y la rabia de una mayoría de chilenos con las formas de política institucional y con la semi-democracia en que vivimos (¿o la dictadura constitucional burguesa?). Independientemente de cuál sea la «salida» que se imponga, lo que aún está en juego es la capacidad del pueblo para expandir el proceso de repolitización, o sea, reconstruir y recuperar tradiciones políticas allí donde existieron, así como potenciar la nueva politización actualmente en curso, cuyo contenido es ahondaren la conversación sobre los males que nos agobian y los bienes comunes a los que aspiramos a llegar¹⁸.

El «Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución» de la clase política chilena (viernes 15 de noviembre)

Lo que el miércoles 13 se insinuaba, avanzó en tiempo récord, para que los noticieros de la televisión anunciaran, el jueves 14, que estábamos ad portas de un gran «acuerdo histórico» en el Congreso Nacional para contener la crisis mediante un cambio constitucional.

La madrugada del viernes 15, la clase política parlamentaria chilena anunció un gran Acuerdo por la Paz Social y una Nueva Constitución. Curiosa denominación, la de un acuerdo por la paz, ya que era lo que había solicitado Sebastián Piñera en su última aparición pública. El acuerdo, básicamente, afirma la voluntad de producir un cambio constitucional, con un plebiscito de entrada – en abril de 2020–; la elección de constituyentes en la votación municipal de octubre del mismo año,

el funcionamiento de una «Convención» por nueve meses prorrogables, y un plebiscito ratificador al final del proceso.

En el plebiscito de abril, la ciudadanía deberá pronunciarse acerca de si está de acuerdo en cambiar la Constitución que nos rige y sobre la forma en que este cambio se debe realizar: una Convención Mixta Constitucional (50% de constituyentes elegidos y 50% de parlamentarios actuales), o una Convención Constitucional, con todos sus miembros elegidos.

La mayor dificultad del «gran acuerdo», sin embargo, se produjo al fijar los

parlamentarios los quórum que los constituyentes deberán respetar para producir los cambios. Se deben reunir dos tercios de los votos, de tal modo que si un tercio más uno se opone, el cambio no se aprueba. El problema fue que una primera opción de la derecha fue sostener que, en tal caso, se mantenía vigente lo dispuesto por la Constitución de 1980. Luego de arduas negociaciones, el acuerdo fue mantener los dos tercios, pero a partir de una hoja en blanco, o sea, sin hacer referencia la Constitución de 1980.

El gran acuerdo parlamentario representa, sin embargo, a nuestro juicio, tres grandes problemas fundamentales:

1. Se trata de un acuerdo autorreferido «en las alturas» sin consulta ciudadana, que fija las formas y los tiempos del cambio constitucional

Los actuales parlamentarios y dirigentes políticos chilenos producen un acuerdo de dudoso destino democrático, sin consultar ni escuchar a los ciudadanos movilizados por más de tres semanas. Ciudadanos y movimientos sociales que ya han iniciado –a través de cabildos y asambleas– un debate sobre la necesidad del cambio de la Constitución y sus principales enfoques y demandas. Se trata, entonces, de un acuerdo que acoge la voluntad ciudadana expresada en las calles por cambiar la Constitución, pero que fija «por sí y ante sí» los modos en que el cambio debe producirse. Esta conducta de los políticos chilenos refuerza y recrea lo que el movimiento ciudadano más ha rechazado de la actual «clase política»: trabajar para sí mismos sin escuchar ni interactuar con la ciudadanía.

Si el pueblo pide Asamblea Constituyente, ¿por qué llamarla «Convención Constituyente»? ¿Está implícito el temor al cambio y al ejercicio de la soberanía popular? Y los tiempos: ¿por qué abril de 2020 para el plebiscito, octubre para la elección de Constituyentes, etc., es decir casi un año para iniciar la Convención

y otros tantos meses para deliberar, o sea, unos dos años para contar con una nueva Constitución? ¿Y las medidas sociales urgentes que reclama la sociedad – pensiones, salarios, remedios, fin del crédito con aval del Estado que sufren los estudiantes universitarios– deberán esperar los trámites de proyectos de ley que solo puede proponer el Ejecutivo? ¿O es que se requiere «tiempo político» para ajustar las piezas de la derecha y del gran empresariado de cara a la nueva etapa que se ha iniciado en la política chilena? ¿A quiénes benefician los «tiempos» acordados por la clase política parlamentaria?

2. Salvataje del gobierno de Piñera y del propio parlamento

El gran acuerdo político parlamentario se produce en un tiempo veloz, cuando el gobierno de Piñera mostraba su mayor debilidad, con el bloque en el poder fisurado, sin iniciativa política e insistiendo solo en la represión y una agenda social mínima. Muchos datos indicaban que el debilitamiento político del gobierno lo conducía al colapso, y una importante mayoría de ciudadanos coreaba en las calles la necesidad de la renuncia de Piñera. Pero en verdad, como admitían algunos parlamentarios, la crisis del gobierno arrastraría a la crisis del conjunto de la clase política, es decir al propio parlamento. Se requería en consecuencia, una acción de «salvataje del gobierno» y también del propio parlamento («uno para todos y todos para uno»).

El «gran acuerdo histórico» es en realidad un acto de recreación y reproducción de la clase política en el poder, para lo cual nuestros políticos profesionales han mostrado históricamente gran oficio: ejercer el poder con el pueblo a una debida distancia. Es la gran debilidad o, más claro aún, los evidentes déficits de una «cultura democrática» de los que adolecen las élites chilenas, que una vez más se hacen visible y manifiestos.

3. Los vetos y el control: los dos tercios y la elección por listas (que todo cambie para que nada cambie)

En los procedimientos que fija el «gran acuerdo parlamentario» hay tres cuestiones claves que apuntan a la autorreproducción de la política tradicional chilena. En primer lugar, es sospechoso que solo el plebiscito de salida sea con «voto obligatorio», mientras que el plebiscito de entrada se hará con «voto voluntario» (en la última elección municipal, la abstención alcanzó al 64% de los electores, y en la última presidencial el 52%). ¿Se busca de este modo influir en los eventuales resultados del plebiscito de entrada? Por ejemplo, que la derecha, con más fidelidad de sus votantes, incline la balanza hacia la Convención Constitucional Mixta y de este modo asegurar un mayor control sobre el cambio constitucional.

En segundo lugar, la cuestión de los dos tercios, más allá de que sea a partir de una «hoja en blanco», hace posible que la minoría se imponga sobre la mayoría (es curiosa la semejanza con el sistema binominal, que operaba con ese mismo principio y que hacía que la derecha, con un tercio más uno de la votación, podía aspirar a controlar la mitad del Congreso). ¿Por qué prescribir de antemano un quórum tan alto? Y si se impone el tercio (o sea, la minoría) sobre una temática importante de la Constitución ¿qué permanece? ¿La ley preexistente? O, como se indica, una nueva ley que debe ser discutida por el Congreso Nacional.

En tercer lugar, los constituyentes se elegirán de acuerdo al actual sistema de elecciones, o sea por listas de coaliciones partidarias e independientes. ¿Pero qué posibilidades tienen los independientes frente al poder de las actuales coaliciones políticas? La Convención mixta o toda elegida, ¿no recreará el actual sistema de representación y les dará a los partidos políticos el control sobre la Convención?

En suma, el mayor riesgo del acuerdo parlamentario es que el proceso constituyente quede en manos de la misma clase política actual y que asistamos a una nueva operación de gatopardismo: que todo cambie para que nada cambie.

Las tareas y desafíos ciudadanos

No es posible predecir la capacidad de respuesta de los ciudadanos y movimientos sociales movilizados frente al «gran acuerdo parlamentario». Algunos lo valoran como un avance, muchos desconfían y los más organizados han manifestado su rechazo, como Unidad Social que agrupa a gremios y movimientos. Desde el Frente Amplio, los quiebres ya se hicieron públicos, con la renuncia de Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso, y otros 72 militantes a Convergencia Social. En el tiempo próximo, habrá que tener en cuenta cómo evolucionan las reacciones al «acuerdo parlamentario», tanto desde los firmantes y el gobierno como de quienes lo critican o rechazan, amén de la manipulación obsesiva de la televisión y la prensa en favor de las formas tradicionales de la política, que se profundizará en los próximos días. Estos serán datos relevantes a considerar en las futuras opciones de estrategia de los movimientos sociales.

Desde nuestra perspectiva, los ciudadanos movilizados y los movimientos sociales, junto a sus capacidades para mantener activa la movilización, insistiendo en las demandas sociales más urgentes, deberán enfrentar tres grandes desafíos en el campo del cambio constitucional:

1. Continuar y fortalecer los procesos de politización de las bases de la sociedad

La experiencia vivida ha hecho evidente que, como está ocurriendo, es necesario recrear la política, dotarla de nuevos contenidos ciudadanos y populares. El rechazo a la clase política no significa renunciar a la política, sino que, al contrario, implica favorecer la repolitización de las mayorías ciudadanas, muchas de las cuales «naturalizaron» el orden neoliberal y que, en el contexto

del actual «estallido social», han despertado. Es el tiempo de fortalecer ese «despertar» para hacer emerger nuevos actores, nuevas formas y nuevas orientaciones para la política nacional.

2. Avanzar en el proceso constituyente, ya iniciado

Desde el punto de vista de los ciudadanos movilizados y los movimientos sociales, el proceso constituyente encaminado a cambiar la actual Constitución Política del Estado ya se inició en los Cabildos y Asambleas Territoriales. Este proceso requiere expandirse e iniciar intercambios con otros vecinos, otras poblaciones y otros movimientos, para reconocerse en la diversidad y en la heterogeneidad, convocando a las mujeres y hombres sencillos de nuestro pueblo. Coordinar estos esfuerzos es también parte del desafío para fortalecer la unidad social y política del pueblo.

3. Hacia una Asamblea Constituyente de los movimientos sociales

19

Con independencia del «gran acuerdo parlamentario», los movimientos sociales pueden avanzar y generar las condiciones para realizar su propia Asamblea Constituyente, en que acuerden sus propios «principios constitucionales», sus propios contenidos y sus propias propuestas de cambio social y político. Esta puede ser una manera de influir con más poder y unidad del pueblo en los cambios constitucionales que inevitablemente, «más temprano que tarde», se tendrán que realizar en el nuevo Chile que emergió con el estallido social de octubre de 2019.

¹⁵ «Estallido social en el Chile neoliberal». En: www.ongeco.cl>.

¹⁶ El «paro de los camioneros», de octubre de 1972, en contra del gobierno de la Unidad Popular, duró prácticamente un mes, pero sus actores, intereses y orientaciones no expresaban al campo popular. Por esta razón también fue denominado «paro patronal».

¹⁷ Esta perspectiva, sin bien parece poco probable en el tiempo cercano, en el marco regional latinoamericano no es auspiciosa, si se tiene en cuenta el reciente golpe de Estado en Bolivia y las nuevas tendencias fascistoides de la derecha en el continente. Agradezco los comentarios de Marcelo Mateo, comunicador social argentino, que me han invitado a pensar en esta dirección.

¹⁸ Agradezco al sociólogo Hugo Villela por este modo de concebir la actual politización desencadenada por el pueblo chileno. Lo que está en desarrollo es una nueva «polis tización», en que las bases recuperaron su capacidad de acción política, rechazando las formas impuestas por los políticos profesionales chilenos en el contexto de la transición a la democracia.

¹⁹ Algunas organizaciones e intelectuales han sugerido, en estos días, simplemente una «Constituyente Popular».

CAPÍTULO IV

En busca de una salida a la crisis. Notas para el debate

Se va enredando, enredandó

como en el muro la hiedra

y va brotando, brotandó

como el mosquito en la piedra

como el mosquito en la piedra

Ay, sí sí sí

Violeta Parra, «Volver a los 17»

Introducción

Luego de prácticamente seis semanas de movilizaciones, desde el estallido social del 18 de octubre pasado, resulta difícil aún imaginar cuál será la salida a la actual crisis por la que atraviesa la sociedad chilena. En un primer escrito, que publicamos el 22 de octubre, a solo cuatro días del estallido, indicamos dos situaciones que nos parecía influirían en el desarrollo del conflicto. Lo formulamos del siguiente modo:

- Por una parte, desde el gobierno y el Estado, las instituciones viven su peor momento de credibilidad y legitimidad, producto no solo de la corrupción –de la que ya no se salvan ni las iglesias–, sino que además de su abismante distancia e indiferencia para con la sociedad y particularmente con el pueblo.

- Por otra parte, desde el punto de vista de las clases populares y sus luchas, esta movilización que conduce a un «estallido» se hace sin un convocante central, sin orgánicas conocidas (ni partidos, ni la CUT, ni coordinaciones territoriales), por lo que adquiere un «cierto» carácter espontáneo, que hay que matizar, en el sentido de que los estudiantes secundarios y diversos movimientos sociales generaron sus propios procesos de organización y de expresión pública que preceden a este estallido.

Ciertamente, en estas seis semanas, ambas situaciones han evolucionado vertiginosa y significativamente hasta generar una suerte de impasse entre el gobierno y el pueblo movilizado. No obstante, se insinúan cursos de acción posibles que buscamos explicar y caracterizar en la actual fase de conflicto.

1. La violencia: cambiar el foco para legitimar la represión

Luego de que se firmara el Acuerdo por la Paz Social y una Nueva Constitución, el cuadro político se ha venido modificando sensiblemente en varios aspectos. Parafraseando a Violeta Parra, «se va enredando, enredandó». Veamos algunas de las razones:

Se generó un acuerdo entre y desde la «clase política» que reestableció campos

de acuerdos entre la Oposición y el Gobierno, que acogió –a su modo– la demanda ciudadana por el cambio de la Constitución y que buscó descomprimir el conflicto social. Un tipo de acuerdo que reproduce las formas políticas cupulares (sin consulta ciudadana) que han predominado en Chile desde que se inició la transición a la democracia en 1990. Como se dice en la calle, es que «los políticos trabajan para sí mismos». Dada la naturaleza y la forma en que se generó el Acuerdo por la Paz Social y una Nueva Constitución, se produjo el rechazo de los sectores populares más organizados –especialmente de Unidad Social, que agrupa a diversas organizaciones y movimientos sociales–, así como también la desconfianza de vastos sectores de la ciudadanía. Como señalan algunas personas, ¿es que nos van a volver a engañar como con eso de que «la alegría ya viene»?

De este modo se ha producido una suerte de impasse entre la ciudadanía y la clase política y el gobierno, que conduce, por una parte, a los movimientos a insistir en la movilización (marchas, paros, asambleas territoriales, etc.) y, por otra parte, al gobierno a buscar concretar su débil agenda social y a reforzar la represión, ya sea por la vía de aumentar la dotación de Carabineros y la PDI, como de conseguir en el Congreso la aprobación de nuevas leyes represivas (ley antiencauchados, antibarricadas, antisaqueos y despliegue de militares para la protección de la denominada «infraestructura crítica»). En este contexto, de impasse entre los ciudadanos y el gobierno, este último apoyado y reforzado por la televisión, pone el foco en la condena a la violencia y en la necesidad de reestablecer el «orden público». En esta operación, el Ejecutivo recompone sus relaciones con la clase política en el Parlamento y logra que tanto diputados como senadores se pronuncien en favor de sus medidas represivas²⁰, de tal modo que se vuelva más prioritario el orden público que las demandas de cambio social y político. De paso, además, minimiza el impacto provocado por la violación de los derechos humanos.

La violencia es siempre un terreno delicado, que genera alta sensibilidad en la población, y por esta razón se presta para las más diversas manipulaciones. La primera de todas es que tanto altos personeros del Estado como los medios de comunicación morigeran o simplemente no nombran que el principal sujeto de la violencia es el propio Estado a través de sus agentes. No es casual que las

principales víctimas del actual estallido sean personas del pueblo, víctimas del uso indiscriminado de la fuerza. Por otra parte, el estallido se inició con una cuota evidente de violencia social (ataques al Metro y los primeros saqueos) y que los actores fueron diversos (estudiantes, jóvenes pobladores y soldados del narcotráfico). Sin embargo, a poco más de un mes del estallido, han seguido sucediendo saqueos e incendios que el gobierno atribuye a los «vándalos» (que identifica como anarquistas, narcos y delincuentes). Ingresamos entonces a una «zona oscura» en la cual no terminamos de saber quiénes y cuántos actúan, y por qué su acción se ve facilitada en la actual coyuntura de crisis²¹. Sí sabemos con claridad del manejo comunicacional que se hace de este tipo de violencia y sus efectos sobre la población: infundir temor, dividir al pueblo y hacer necesaria la represión en mayor escala.

2. La salida de Piñera: nuevas formas de autoritarismo

La «salida» a la crisis que se comienza a configurar en las últimas semanas parece conducir hacia nuevas formas de autoritarismo, debidamente sancionadas, muchas de ellas, por el Congreso Nacional. En este contexto, surgen varias preguntas: ¿estamos transitando hacia una «dictadura legal»? ¿Esta es la salida que se está configurando desde el bloque en el poder ante la actual crisis? ¿Esta salida contará con el apoyo del conjunto de la clase política? Usamos deliberadamente la expresión «dictadura legal», que fue la manera como el pueblo y la izquierda denominó al segundo gobierno de Arturo Alessandri (1932-1938), que luego de la gran crisis de los años treinta, gobernó gran parte de su período con estados de excepción que le aprobaba la mayoría parlamentaria de la época. Bien podríamos decir, haciendo un poco de historia y de memoria, «nada nuevo bajo el sol».

En rigor, lo que se podría establecer desde el poder es una forma de régimen autoritario –fundada en el miedo al desorden y la inestabilidad política– reforzando los aparatos policiales y con un uso selectivo de las fuerzas armadas,

a las que el gobierno ya ofrece impunidad si sus acciones se realizan en el ejercicio de sus funciones, en defensa propia o cumpliendo las ordenes de sus superiores²².

Queda pendiente dilucidar cómo esta estrategia represiva se articulará con los «tiempos políticos» o, si se prefiere, con el itinerario del cambio constitucional que fijó el Acuerdo Parlamentario: plebiscito de entrada para abril de 2020; elección de los constituyentes, octubre de 2020; elaboración de la nueva Constitución (nueve meses prorrogables); plebiscito de salida para 2021. O sea, un itinerario de dos años. La pregunta es ¿resiste la actual crisis de la sociedad chilena dos años de trámites políticos e institucionales con una clase política desprestigiada y nada de creíble? Una respuesta posible es que el gobierno «compre tiempo político» reforzando la «agenda social», es decir atendiendo de modo significativo las demandas sociales populares. Es posible, pero ésta hasta ahora es débil. En rigor, la capacidad del gobierno y de la clase política de imponer sus tiempos –su itinerario– con altos grados de represión y control social, que es la tendencia en desarrollo, va a depender de las iniciativas que se logren generar en el campo de la sociedad civil, es decir de los ciudadanos y de los movimientos sociales (volveremos más adelante sobre este punto).

No se puede ignorar, además, que la coyuntura regional latinoamericana se ha vuelto extremadamente crítica, tanto por las protestas sociales más recientes que ponen en cuestión el neoliberalismo –en particular, Ecuador, Chile y Colombia–, pero también por los giros y fortalecimientos de la derecha en Brasil, la derrota electoral del Frente Amplio en Uruguay y particularmente con el reciente golpe de Estado en Bolivia. Es decir, vivimos una coyuntura regional en que, por una parte, se fortalecen los movimientos sociales, pero por la otra se reorganiza y reordena la derecha más agresiva y con claros contenidos facistoides, como se ha demostrado en Brasil y Bolivia. Solo como hipótesis, pareciera que se cierra el ciclo de las postdictaduras, con democracias «enanas, amañadas y de gran exclusión»²³ para dar paso a reacciones ultraconservadoras en clave autoritaria y con apoyo popular de iglesias y sectas evangélicas (Brasil) o provenientes del conservadurismo católico (Bolivia).

Hay todavía un campo de análisis más de fondo que comienza a aparecer en algunas entrevistas, columnas y videos en internet que tiene que ver con el significado global de la actual crisis. Se escuchan diversas lecturas e interpretaciones. Anotemos algunas de ellas: estamos en medio de una crisis global de las formas políticas tradicionales, del Estado, de los partidos políticos, etc. (video de Manuel Castells); asistimos a una crisis en el bloque en el poder y al agotamiento de una fase del modelo neoliberal que no tiene, por ahora, formas claras de resolución en el nuevo orden global, con la expansión económica de China, la política de los Estados Unidos, etc. (video de Rafael Agacino); la crisis actual es una crisis terminal de la democracia representativa que solo se puede resolver con mayor autoritarismo y en la frontera de una «guerra civil» (Orlando Sáenz en entrevista con Tomás Mosciatti en CNN). Hay, por cierto, más lecturas de la crisis, en que la tónica general es que estamos en medio de un cambio de dimensiones históricas. Hay que abrirse a estos debates. Sin embargo, es necesario distinguir campos de análisis y tener en cuenta un asunto propio de los historiadores, que es la cuestión de las temporalidades. Los tiempos de la economía, de la política y de lo social se mueven a ritmos diferentes. Por ejemplo, «el derrumbe del modelo», anunciado por Alberto Mayol en 2012, daba cuenta de una crisis, pero al 2019, a pesar de una crisis más aguda, el modelo neoliberal aún sigue vigente; el fin del gobierno de Piñera, anunciado por muchos analistas que llaman la atención sobre su ineficacia, su ausencia de iniciativa, su pérdida de liderazgo, etc., es un hecho que se puede reconocer, pero no significa que su caída sea inminente, más bien es parte del problema; pero, tanto más relevante es el tiempo de lo social, en que el pueblo ha sido el principal protagonista. Sin embargo, el pueblo también tiene sus ritmos: puede golpear con mucha razón y justicia, pero requiere sus propios tiempos para reconstruir lazos, redes y comunidades, y para hacer emerger liderazgos y un nuevo programa político de cambios.

3. La violación sistemática de los derechos humanos o las nuevas formas del terrorismo de Estado en democracia

Los chilenos hemos sido víctimas y testigos de una masiva, sistemática y generalizada violación de nuestros derechos humanos fundamentales, en medio del actual estallido social, que se inició el 18 de octubre pasado.

En Chile, según cifras recientes de Carabineros, se han movilizado unos 4,2 millones de ciudadanos en las últimas cinco semanas. Muy probablemente la cifra sea superior, lo que simplemente revela la magnitud del descontento y de la movilización social. Las formas de movilización de la mayoría de los ciudadanos han sido pacíficas, y los enfrentamientos con la policía, cuando se han verificado, han sido completamente asimétricos (piedras y molotov frente a carros blindados, agua contaminada, bombas lacrimógenas y escopetas antidisturbios). Distinta ha sido la práctica de saqueos e incendios.

Todos los organismos especializados, tanto nacionales como internacionales (Instituto Nacional de Derechos Humanos; Comisión Jurídica, U. de Chile; Amnistía Internacional; Human Right Watch) han reconocido la violación de los derechos humanos, con resultado de muerte, tortura, tratos crueles y humillantes, violencia sexual, especialmente en contra de mujeres. Tal vez la que ha causado el mayor estupor es la referente a las mutilaciones y daños a los globos oculares de más 200 personas, especialmente jóvenes. La represión, en este último caso, deja marcas y huellas imborrables con la pérdida de un ojo o de ambos. A un Chile «que despertó» se le ha buscado hacer perder la vista de sus jóvenes. Dos casos han impactado profundamente a la opinión pública: la del estudiante de psicología Gustavo Gatica, de solo 21 años, que perdió completamente la visión como producto del impacto de balines disparados por carabineros el 8 de noviembre, y el de Fabiola Campillay, de 36 años, que también perdió completamente la visión como producto del impacto de una bomba lacrimógena sobre su rostro el 27 de noviembre pasado.

Una dura experiencia, pero también una dura lección: en Chile, el «nunca más» a la violación a los derechos humanos no se ha cumplido. En plena democracia (restringida, por cierto), con un gobierno elegido en las urnas y que se declara respetuoso del estado de derecho, los derechos humanos se han violado, como indicó Amnistía Internacional, de «modo generalizado». Pero cual es la lección; la recuperación de la democracia en Chile, con «justicia en la medida de lo posible» –como proclamó el presidente Aylwin– no desarticuló las prácticas y aparatos represivos estatales que se crearon y fortalecieron durante la dictadura.

El presidente Piñera, que se proclamó como un demócrata liberal, pasará a la historia como un líder más de la derecha chilena que reprimió a su pueblo desde la más alta posición en el Estado. Y muy probablemente la violación a los derechos humanos de los chilenos será su principal «talón de Aquiles» en el tiempo que permanezca en el poder. Se puede ganar tiempo político con una agenda social activa más represión, pero no se resuelve una crisis política de la magnitud de la actual reprimiendo al pueblo y a la sociedad: simplemente se posterga la resolución del conflicto o se crean las condiciones para nuevos estallidos sociales.

4. ¿Estamos en medio de una revolución democrática en Chile?

No resulta fácil denominar al actual estallido como una «revolución democrática». Sin embargo, si no lo es, ha estado muy cerca de serlo. Veamos algunos de los porqués.

La movilización social desde el 18 de octubre ha sido de una magnitud que ni el más optimista se podía imaginar. Revisando imágenes que circulan en las redes, prácticamente no hay pueblo, de norte a sur del país, en que no se haya verificado una marcha, una concentración o alguna manifestación del malestar y de la necesidad de producir cambios en la sociedad chilena. En un país de un poco más de 17 millones de habitantes, muy probablemente se han movilizado entre 5 a 6 millones de ciudadanos, es decir, casi un tercio de la población.

Muchos hemos llamado «estallido social» al fenómeno que hemos vivido, tanto por su magnitud como por la velocidad en que se desenvolvió, especialmente en los primeros días, tanto en Santiago como en provincias. También se ha insistido en su carácter espontáneo, pero habría que agregar, que muchos grupos –los mapuche, las feministas, los NO + AFP, los profesores, los estudiantes, especialmente los secundarios– se venían movilizandando desde hace ya bastante tiempo. Y lo hacían ensayando nuevas formas de organización: en asambleas; nuevos repertorios, desde la acción directa hasta la «acción de arte». En la actual coyuntura, todos confluyeron y se sumaron muchos más. Este ha sido probablemente el mayor mérito de la movilización: sumó mayorías y este es un dato políticamente muy relevante. Las marchas en los más diversos pueblos de Chile y la «marcha más grande de Chile» del viernes 25 de octubre han dado prueba de ello.

De todos modos, como indicamos en nuestros primeros análisis, el estallido se caracterizaba por carecer de un convocante central, de orgánicas preestablecidas o de coordinaciones territoriales. Ello, por una parte, representaba una novedad para los chilenos y chilenas, acostumbrados a reconocer una «conducción» de los partidos políticos o determinados liderazgos, muchos de ellos francamente patriarcales. Pero, por otra parte, colocaba un gran desafío: aprender a movilizarse por acuerdos colectivos y con liderazgos colectivos desde las bases y, más todavía –como dice el poema de Antonio Machado, popularizado por J.M. Serrat– había que aprender a «hacer camino al andar».

En este hacer camino al andar se fue clarificando que la movilización producía

cambios –por fin, el pueblo comenzaba a ser escuchado–, pero también que el mayor cambio que había que producir era el cambio de la Constitución, mediante una Asamblea Constituyente. Este es, tal vez, el segundo logro de la mayor relevancia: fue la movilización la que instaló el tema del cambio de la Constitución, que los políticos asumieron –a su modo y con sus trampas– en el denominado «Acuerdo por la Paz Social y una Nueva Constitución». Hasta antes del estallido, el cambio de la Constitución no estaba en la agenda del gobierno y de ningún partido político, y si lo estaba en algún partido de izquierda, no era una prioridad.

Este horizonte constituyente animó a muchos a pensar en cabildos y asambleas territoriales, es decir, en dar inicio a un debate y una deliberación «desde las bases» sobre el cambio constitucional. La idea de un cambio constitucional se ha ido constituyendo, de este modo, en cientos de asambleas en barrios populares y de la clase media, en un horizonte y una utopía movilizadora sobre lo que deben ser nuestros «bienes comunes».

Otro componente muy importante de la movilización ciudadana ha sido su capacidad de persistir en el tiempo: nadie imaginaba seis semanas de movilizaciones, y todos los esfuerzos del gobierno por «volver a la normalidad» han fracasado hasta ahora. Muchos datos objetivos y sobre todo subjetivos nos indican que Chile ya no es el mismo ni será el mismo que antes del estallido social. ¿Esto quiere decir no solo que «Chile despertó», sino, además, que Chile cambió? El tiempo, el tiempo de la sociedad nos lo dirá.

En el desarrollo de las capacidades de mantener activa la movilización, los jóvenes y la ocupación de la Plaza Italia (rebautizada como Plaza de la Dignidad) han sido logros impensados en otras épocas. Un reconocimiento reiterado a los jóvenes han sido los testimonios de mujeres de la tercera y la cuarta edad, que declaran su agradecimiento, indicando que «ellos luchan por nosotras». Por otra parte, para quienes han concurrido en estos días a la ex Plaza Italia, han podido comprobar el ingenio y la creatividad para manifestarse de los grupos de arte, la energía de las barras bravas, así como del apoyo que prestan

los equipos médicos de primeros auxilios, y también los servicios del comercio popular que se extienden por el Parque Forestal. Por cierto, un papel relevante lo cumplen los jóvenes que organizaron las «líneas» de defensa de la Plaza para contener, en la medida de sus fuerzas, las arremetidas de la policía. La ocupación de la ex Plaza Italia, en cierta forma se ha ido ritualizando, en el mejor sentido de la palabra, como espacio liberado, pero al mismo tiempo asediado por el gas y los ataques de la policía. ¿No es ésta una metáfora del Chile actual, decidido a ejercer su soberanía y libertad y al mismo tiempo amenazado y asediado por el Estado?

Otro campo muy expresivo de los cambios que se han verificado en Chile es el de las conquistas simbólicas frente a los zócalos culturales más duros de la nación: el colonialismo y el patriarcado²⁴. En efecto, no solo la bandera mapuche ha flameado y acompañado las marchas de norte al sur del país, sino que varias estatuas de los conquistadores españoles han sido derribadas: Francisco de Aguirre en La Serena y Pedro de Valdivia, en Concepción, Temuco y Valdivia. Del mismo modo, la performance y la canción El violador eres tú, del Colectivo Las Tesis, recorre barrios y ciudades de Chile y del mundo –en Europa, África, América y Asia– involucrando a mujeres de distintas edades y procedencias. Las luchas del pueblo mapuche y de las feministas que preceden al estallido del 18 de octubre han alcanzado un alto impacto social, político y cultural y, de cierto modo, están marcando y dando potentes contenidos a la protesta social del Chile de hoy.

Junto a todos estos logros, que no se pueden ni se deben ignorar o minimizar, porque así es como el pueblo escribe su historia y no como lo prescriben las teorías generales de la revuelta o la revolución (en rigor, cada pueblo hace su historia, y el principal deber de los políticos y los intelectuales es reconocer y valorar los modos en que sus pueblos “hacen la historia”), desde esta perspectiva, junto con valorar los logros sociales, políticos y culturales de la movilización, hay que reconocer también sus límites, dificultades y desafíos. La principal dificultad del actual movimiento ciudadano tiene que ver con su capacidad para modificar las relaciones de poder tanto en la sociedad civil como en el Estado. En la sociedad civil, tal vez el principal instrumento son los cabildos y asambleas territoriales, así como la generación de coordinaciones que

vayan cimentado y recreando su unidad social y política. Los principales desafíos en el Estado son hacer avanzar sus demandas más inmediatas (pensiones, salarios, salud pública, educación gratuita y de calidad, vivienda, etc.) así como imponer a la clase política la voluntad de un proceso constituyente genuinamente democrático; o sea, como ejercicio de la soberanía popular.

En la actual coyuntura nada está asegurado de antemano. El fortalecimiento de la sociedad civil a través de encuentros, cabildos y asambleas es un proceso de aprendizaje, de reflexión, de debates y de deliberación que necesita expandirse y multiplicarse hasta sumar a los más sencillos, a los menos politizados. No basta ser mayoría en la calle, hay que proponerse ser mayoría en el barrio, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, en el club deportivo, en toda la diversidad y anchura de nuestro pueblo. Este es el principal desafío de una «revolución democrática»: la capacidad de sumar diversidades, las propias de nuestro pueblo. En este tiempo de aprendizajes hay que escuchar a nuestros pueblos originarios y conocer de sus historias de opresión y colonización, así como de sus luchas emancipatorias, de su cultura ancestral, de su capacidad para resistir, de su relación con la naturaleza, de su sociabilidad. Del mismo modo, estamos en el tiempo del feminismo, y las mujeres ya decidieron luchar en contra del patriarcado no solo por las desigualdades y opresiones que consagra, sino por los modos en que organiza las «relaciones de poder en la sociedad», asignando roles, predefiniendo identidades de género, legitimando cotidianas y odiosas diferencias y sosteniendo prácticas de violencia en contra de las mujeres. También es el tiempo de hacernos cargo de nuestras relaciones con la naturaleza, del agua que la dictadura dejó en manos de privados y de hoy altos funcionarios de Estado; de las plantaciones de bosques que atentan contra el territorio mapuche, secan nuestros suelos y alimentan el negocio de unos pocos; de nuestros metales –especialmente el cobre y el litio– entregados a las transnacionales; de la contaminación del aire, del suelo y de nuestro mar, también lícito y objeto de negocios de un puñado de familias poderosas.

La mayor disputa política del tiempo venidero será la capacidad del pueblo movilizado por imponer su voluntad democrática a la clase política. Se trata, por cierto, de un desafío mayor, difícil de alcanzar en corto plazo. Reconociendo las dificultades para modificar los plazos y las formas en que la clase política ha

definido el cambio constitucional, no se debe descartar la posibilidad de una Asamblea Constituyente de los ciudadanos organizados en Asambleas y de los Movimientos Sociales. De esta manera, y con autonomía del Estado, la sociedad civil podría elaborar sus propios principios y propuestas para una nueva Constitución Política del Estado, disputando contenidos con el discurso oficial, oponiendo visiones y puntos de vista, presionando a los eventuales «constituyentes oficiales». En rigor, el pueblo puede actuar dentro de la legalidad preestablecida, pero también, de manera fáctica, por la vía de los hechos, como los estudiantes secundarios que evadieron el pago del Metro y pararon las alzas y mucho más; o los obreros chilenos que hacían huelgas desde antes de que se promulgara el Código del Trabajo en 1931, o los pobladores que tomaban sitios antes de que se fundara el Ministerio de la Vivienda o que se promulgara la Ley de Juntas de Vecinos, en 1968. Una política de autonomía requiere de mucha flexibilidad táctica, pero al mismo tiempo de un firme horizonte estratégico.

Finalmente, un tema que desafía nuestra imaginación histórica tiene que ver con el «Chile que queremos». En otras épocas, especialmente en los años sesenta, ello parecía prescrito: socialismo comunitario, vía no capitalista de desarrollo o socialismo a la chilena, proyectos que fueron barridos por el terrorismo de Estado desplegado por la dictadura cívico-militar encabezada por Pinochet. A la dictadura le sucedió una democracia restringida, semisoberana y con un pueblo convertido en «gente» y en consumidores. En las actuales movilizaciones, el «Chile que queremos» es un horizonte que se constituye de nuevas maneras, con nuevos contenidos, con afirmaciones y silencios. Hay temas valóricos centrales, como la dignidad de nuestro pueblo, la solidaridad y el reconocimiento de sentidos colectivos y comunitarios (no todo es negocio y mercantilización de la vida social); hay también temas políticos centrales, como el reconocimiento y la valoración de la participación ciudadana como principio y sostén de una genuina democracia –que va más allá del voto y de la democracia representativa–, la desarticulación de los aparatos represivos del Estado (no más GOPE ni Fuerzas Especiales), el reconocimiento de los derechos y la cultura de nuestros pueblos originarios, la equidad de género y la lucha en contra del patriarcado, la protección de la naturaleza, la protección de los adultos mayores y la afirmación de derechos políticos, económicos, sociales y culturales. La mayoría de estos principios toman formas prácticas en proposiciones que alcanzan altos consensos, como la mejora en los salarios, el fin de las AFP, la ampliación y

mejora en los sistemas de salud, educación y vivienda, etc. Todos estos temas han sido parte de las agendas que conversan y discuten –un hecho inédito– miles de chilenos en los cabildos y asambleas territoriales. Un cambio en la Constitución se presenta, de este modo, como una condición estrictamente necesaria para poner en marcha las reformas que doten de mayor responsabilidad social al Estado.

Estamos en medio de un proceso de deliberación ciudadana que, de diversos modos, va instalando y abriendo conversaciones sobre una nueva moral ciudadana que, con realismo, va indicando «los mínimos que nos parecen comunes» para fundar un nuevo orden social.²⁵ Antonio Gramsci sostenía que una nueva hegemonía se constituye sobre la base de una nueva «dirección ético-política» o como «dirección intelectual y moral.»²⁶ Estamos en medio de ese proceso, de escucharnos y compartir nuestros diagnósticos sobre los males que nos agobian, pero también sobre los mínimos éticos necesarios para hacer emerger un Chile diferente. Como diría nuestra sabia Violeta: «Y va brotando, brotandó, como el musguito en la piedra; como el musguito en la piedra ay, sí, sí, sí».

Santiago, miércoles 4 de diciembre de 2019

²⁰ [El miércoles 27 de noviembre un grupo de senadores llamó al gobierno a «implementar una agenda social profunda con cambios estructurales para enfrentar las desigualdades de nuestro país».](#) A su vez, [se comprometieron a avanzar «resueltamente en la agenda legislativa de seguridad, que incluye proyectos que permitan retomar y reformar las policías, inteligencia, y fortalecer las facultades del Estado para enfrentar los saqueos, barricadas y la acción violenta de los delincuentes».](#) (CNN Chile, 27 de noviembre de 2019). Por otra parte, el 24 de noviembre, [un grupo de 80 militantes socialistas, encabezado por Ricardo Nuñez y José Miguel Insulza, suscribieron una carta en que denuncian que «nuestra democracia está amenazada», ya que «en estos difíciles momentos hay quienes, de buena fe o movidos por radicalizadas e interesadas visiones,](#)

propagan la idea de que en Chile no hay democracia, lesionando la cohesión social y sembrando la desconfianza en torno a este noble valor». Agregan, así mismo que «hay también minorías, que (...) se han dedicado a ciega destrucción, al vandalismo y al pillaje. En estas minorías coexisten lumpen y sectores marginados, bandas criminales ligadas principalmente al narcotráfico, y grupos extremistas y antisistémicos, altamente ideologizados y organizados en torno a un único objetivo: destruir las instituciones públicas y privadas y arrasar con el Estado de derecho y la democracia chilena». La Tercera, Innovación Digital, 26 de noviembre de 2019.

²¹ No desconocemos el impacto del narcotráfico en los barrios populares y poblaciones chilenas. Se trata, sin embargo, de un actor complejo y heterogéneo en que conviven diversas lógicas de acción y que, por cierto, ha intervenido en la actual crisis.

²² Ver propuesta de ley del gobierno de Sebastián Piñera al Parlamento. Ver en Prensa Presidencia, 26 de noviembre de 2019.

²³ Agradezco esta indicación a Marcelo Mateo, comunicador social argentino.

²⁴ Agradezco los comentarios de Ximena Valdés S. para este campo de análisis.

²⁵Z Hugo Villela, «Para una moral ciudadana democrática. El bien común como subjetividad de la sociedad». 1998. Insumo para el movimiento de cabildos ciudadanos vecinales; territoriales y funcionales. 2019. En: www.ongeco.cl.

²⁶ Gramsci, a propósito de su estudio de la historia italiana, sostenía como criterio metodológico: que «la supremacía de un grupo social se manifiesta de

dos modos, como «dominio» y como «dirección intelectual y moral», y agregaba: «Un grupo social puede e incluso debe ser dirigente aun antes de conquistar el poder gubernamental (ésta es una de las condiciones principales para la misma conquista del poder); después, cuando ejerce el poder y aunque lo tenga fuertemente en el puño, se vuelve dominante, pero debe seguir siendo también «dirigente»». A. Gramsci, Cuadernos de la Cárcel N° 19, Risorgimento Italiano. México, Ediciones ERA, 1999, Volumen 5, p. 387.

EPÍLOGO ABIERTO

Confirmando, desgraciadamente, una de nuestras hipótesis, el miércoles 4 de diciembre, en la Cámara de Diputados, se debatió y aprobó la idea de legislar sobre el conjunto de leyes represivas propuestas por el gobierno, en particular, leyes de antisaqueo y antibarricadas, que tipifican y criminalizan un conjunto de acciones que alteren el orden público. El alcance de estas propuestas de ley es sorprendente, ya que se considerará delito desde interrumpir el tránsito, el uso de capucha o pañoleta que cubra el rostro, hasta levantar una barricada, participar en un saqueo u ocupar un inmueble público o privado, urbano o rural (es decir, una «toma de sitios» como han practicado históricamente los pobladores; o una toma de un predio agrícola, como hacen los mapuche en el sur para recuperar sus tierras usurpadas). La idea de legislar recibió 127 votos a favor, solo 7 en contra y 13 abstenciones. La centro-izquierda parlamentaria, desorientada y funcional al sistema institucional, perdió la brújula. Las y los diputados del Frente Amplio mayoritariamente aprobaron las nuevas leyes –entre ellas y ellos, los líderes del movimiento estudiantil de 2011-2012, Giorgio Jackson y Gabriel Boric– y solo algunos rechazaron o se abstuvieron. Del Partido Comunista solo 2 diputados se opusieron; el resto –incluido su secretario general y la otrora dirigente estudiantil Camila Vallejo– se abstuvieron.

¿Qué había ocurrido? A juzgar por algunas de sus declaraciones, fueron sensibilizados por el discurso gubernamental relativo a la violencia, que en días anteriores al debate parlamentario adquiría cierta virulencia, especialmente desde sectores del narcotráfico, aunque también se denunciaba en la prensa la participación de un concejal de Renovación Nacional (partido de gobierno) en los saqueos en la ciudad de La Calera (las ambigüedades de la violencia a la que nos hemos referido más de una vez en este libro). Sin embargo, entraron en el juego, y junto con condenar los saqueos, validaron la mayor criminalización de la protesta social desde que se recuperó la democracia. El acuerdo de la Cámara de Diputados se trasladó al Senado, que puso objeciones que aún se encuentran en trámite parlamentario. De aprobarse definitivamente estas leyes, y que esperamos no ocurra, se sumarían a las mayores leyes represivas del Estado

chileno desde el siglo XX, que incluye la Ley de Seguridad Interior del Estado, promulgada en 1937, y que estableció la distinción entre delitos contra la seguridad interior del Estado y delitos contra el orden público y la Ley de Defensa Permanente de la Democracia (conocida como Ley Maldita) de 1948, que proscribió la participación política de los comunistas, los persiguió y los puso fuera de la ley.

La Cámara de Diputados, el día 5 de diciembre, escribió una página negra en la historia política chilena, evidenciando, una vez más, su incomprensión de la actual crisis y su distancia de la vida común de los chilenos, pero, sobre todo, buscando poner límites y penas leoninas a la expresión pública del descontento ciudadano. El orden público, para ellos, es funcional a los roles que se han atribuido como garantes de una institucionalidad defectuosa y como actores cuasi monopólicos de la acción política.

La clase política chilena suma entonces rechazos y desprestigios, confirmando los peores augurios relativos a su incompetencia para escuchar y dar respuestas eficaces y pertinentes al malestar ciudadano.

Un segundo hecho relevante, en los últimos días, es que los municipios persistieron en su idea de una Consulta Ciudadana, que se inició por vía electrónica el miércoles 11 de diciembre y de manera presencial el domingo 15 de diciembre de 2019. Los resultados publicados hasta ahora indican que, escrutados 2.114.075 votos, un 92,4% se inclinó en favor de una nueva Constitución Política del Estado; un 73,5% se mostró partidario de una Convención Constitucional (denominación que reemplazó la idea de Asamblea Constituyente, en el Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución). Un 86,9% aprobó la idea de que los municipios deben contar con mayores atribuciones y recursos.²⁷

Sin lugar a dudas, los resultados de la Consulta de la Asociación Chilena de Municipios son altamente relevantes, ya que indican con claridad el alto

consenso que ha alcanzado en Chile la necesidad de una nueva Constitución Política el Estado, que deje atrás el pasado dictatorial que consagra la actual Constitución vigente, hecha aprobar en un Plebiscito por Pinochet en 1980, sin registros electorales y sin acceso a la prensa de la oposición.

Iniciar, desde el punto de vista institucional, el proceso constituyente contenido en el Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución suponía una reforma a la actual Constitución, trámite ya aprobado por ambas Cámaras del Congreso los días 18 y 19 de diciembre pasados. No obstante, este acuerdo y la reforma a la Constitución dejaron pendientes tres demandas ciudadanas: la equidad de género; cupos por los pueblos originarios y mecanismo para la participación de los independientes. Sin embargo, en la Cámara de Diputados, el día 19, se repusieron estos temas como proyecto de ley, y ahora con una derecha dividida en estas materias y el apoyo de Renovación Nacional y Evopolis, se aprobaron – con amplias mayorías– la paridad de género, cupos reservados para los pueblos originarios y participación de los independientes. Queda pendiente, no obstante, el debate y la decisión del Senado. De todos modos, esto indica que se está produciendo un relativo reordenamiento y nuevos liderazgos en la derecha, más sensibles, a su modo, a las demandas ciudadanas, y que de paso dejan en muy mal pie a la UDI (Unión Demócrata Independiente) como expresión de la derecha más conservadora.

Finalmente, hay que indicar, en este epílogo abierto, que las movilizaciones y los debates en Asambleas de los ciudadanos no ceden y no se detienen. Al mismo tiempo, el movimiento feminista alcanza los mayores impactos, luego de la difusión nacional y mundial de la canción y la performance *Un violador en tu camino*. Con todo, la represión tampoco cede y ensaya nuevas formas como el copamiento de la ex Plaza Italia (hoy Plaza de la Dignidad) con mil carabineros el pasado viernes 20 de diciembre para impedir que se reunieran en ella los ciudadanos movilizados. El nuevo intendente de Santiago declaró «tolerancia cero» a las manifestaciones sin previo permiso de la autoridad. Los jóvenes, sin embargo, buscaron romper el sitio y lo lograron en horas de la tarde, pero un manifestante resultó atropellado por el carro lanzagases de carabineros y debió ser trasladado en estado grave hasta un centro asistencial.

Cerramos este libro en las vísperas de las fiestas de fin de año, el que se cierra en un clima de logros de las movilizaciones populares y ciudadanas, sobre las que hemos llamado la atención reiteradamente en este libro, aunque también de dolor para las víctimas de la represión (en especial, para heridos y mutilados, que perdieron parcial o totalmente la visión) y un alto número de detenidos que permanecen en las cárceles (una nueva generación de «presos políticos» en Chile)²⁸.

El desafío estratégico mayor en lo que viene será asegurar el desarrollo del proceso constituyente que pueda culminar en una genuina Asamblea Constituyente, con amplia y efectiva participación ciudadana, así como el desarrollo de un programa político que reestablezca derechos económicos, sociales y políticos. Ambos procesos –el Constituyente y el Programático– debieran traducirse en una modificación sustantiva de las relaciones de poder en Chile, para que –como dice la calle– la dignidad se haga costumbre y la democracia un modo de sociabilidad y convivencia entre los chilenos.

Los principales actores sociales y políticos, desde el campo ciudadano, que están llamados a jugar roles muy activos en 2020 son las Asambleas Territoriales, que se han multiplicado a lo largo del país y que requieren avanzar en la generación de coordinaciones comunales, regionales y en el nivel nacional; los movimientos sociales, que han ganado en desarrollo en los últimos años: feministas, mapuche y socioambientales; y articulaciones como Unidad Social, que deben favorecer la unidad del pueblo y de los trabajadores organizados. Cada uno de estos actores, en sus propias formas y sus propios tiempos, será fundamental en la configuración de una salida al conflicto que abrió el estallido de octubre de 2019 y que tiene todavía un largo camino por transitar. Por esta y muchas otras razones, este epílogo no podía ser sino «abierto».

²⁷ [Diario Universidad de Chile, Radio Universidad de Chile «on line». 17/12/2019.](#)

²⁸ [El Informe del Comité Interamericano de Derechos Humanos 2019 para Chile reconoce, a noviembre de este año, 26 víctimas fatales, 11.564 heridos atendidos en servicios de urgencia, 283 por daño ocular; 20.645 detenidos, 950 de ellos en prisión preventiva; Fiscalía investiga 2.670 casos de violación a los derechos humanos, 422 de ellos de niños y niñas. \(The Clinic, on line 6 de diciembre de 2012\). El Informe de la ONU sube a 350 el número de personas que han sufrido traumas oculares. Ver Informe sobre la Misión a Chile. 30 de octubre – 22 de noviembre de 2019. Naciones Unidas. Derechos Humanos. Oficina del Alto Comisionado.](#)





Este libro ha sido posible por el trabajo de

Comité Editorial Silvia Aguilera, Michel Bonnefoy, Ramón Díaz Eterovic, Mario Garcés, Jorge Guzmán, Tomás Moulán, Naín Nómez, Julio Pinto, Paulo Slachevsky, María Emilia Tijoux, José Leandro Urbina, Ximena Valdés, Verónica Zondek, secretaria editorial Marcela Vergara Producción Editorial Guillermo Bustamante Proyectos Ignacio Aguilera Diseño y Diagramación Editorial Karla Morales, Leonardo Flores Corrección de Pruebas Raúl Cáceres Comunidad de Lectores Francisco Miranda ventas Elba Blamey, Olga Herrera, Ilva Calderón Bodega Francisco Cerda, Paola Estévez, Hugo Jiménez, Juan Huenuman, Carlos Rodríguez, Henry Martínez Librería lom Ernesto Córdova Comercial Gráfica LOM Elizardo Aguilera, Eduardo Yáñez Servicio al Cliente Ingrid Rivas Diseño y Diagramación Luis Ugalde, Marjorie Dotte Edición electrónica Sergio Cruz Producción Imprenta Carlos Aguilera, Gabriel Muñoz Secretaria Imprenta Jasmín Alfaro pre prensa Mariela Valdez Impresión Digital William Tobar Impresión Offset Rodrigo Véliz, Francisco Villaseca Encuadernación Rosa Abarca, Andrés Rivera, Edith Zapata, Pedro Villagra, Romina Salamanca, Fernanda Acuña, Iván Peralta mensajería Cristóbal Ferrada Mantención Jaime Arel Administración Mirtha Ávila, César Delgado, María Paz Hernández.

LOM ediciones

Indice

[INTRODUCCIÓN](#)

[CAPÍTULO I Octubre de 2019](#)

[CAPÍTULO II Represión, agenda social y la presión social que no cesa](#)

[CAPÍTULO III Notas a tres semanas del estallido, en los días que se indican](#)

[CAPÍTULO IV En busca de una salida a la crisis. Notas para el debate](#)

[EPÍLOGO ABIERTO](#)